

ISSN 1819-6543

LEGALIDAD SOCIALISTA No. 36/2012
Revista Electrónica
Fiscalía General de la República de Cuba



**“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los
cubanos a la dignidad plena del hombre”**

José Martí

GALIDAD SOCIALISTA

Año 9, No. 36/ 15 de julio de 2012

Revista Digital

EDITADA POR:

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

DIRECTOR EJECUTIVO

Lic. Miguel Angel Garcia Alzugaray

CONSEJO DE REDACCIÓN

Msc. Marlen Fernández Machado

Msc. Fernando Rodríguez Infante

Msc. Osmín Álvarez Bencomo

Lic. Dyxán Fuentes Guzmán

EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Msc. Caridad Sabó Herrera

Lic. Leidy Sánchez Bernal

DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN

Lic. Leidy Sánchez Bernal

Lic. Yanisel Bernal Almira

REDACCIÓN

Calle 1ra y 18, No. 1801

Miramar, Playa, La Habana

CP 11 300

Tel.: (537) 206-9066

E-Mail: relaciones@fgr.cu

RNPS: 2076

SUMARIO

Apreciado lector.....2

Trabajadores de la Fiscalía firman Código de
Ética.....3

Cuba demuestra en Naciones Unidas su firme
compromiso contra la tortura.....4

Intervención del Vicefiscal General de la
República Rafael Pino Bécquer, en la
presentación del informe de Cuba en virtud de
La Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes
(Ginebra, 22 de mayo del
2012).....5

La consumación temporal del delito. Una
aproximación a la consumación retardada/
Autor: Esp. Dimas A. Herrera Gandol.....9

Particularidades de las conductas criminógenas
donde se involucran las Tecnologías de la
Informática y las Comunicaciones en el contexto
de las personas jurídicas /Autora: Esp. Lidia
Estévez García.....19

La cámara Gesell. Su instrumentación en el
interrogatorio de menores en los Procesos
Penales/Autor Arnel Medina
Goite.....30

Prisioneros del Imperio.....54

Eventos.....57

Glosario de términos jurídicos.....64

La Revista Legalidad Socialista es una publicación trimestral de la Fiscalía General de la República de Cuba. Constituye un espacio donde se presentan artículos, monografías e informaciones que expresan ideas personales de diversos autores.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de exponer sus valoraciones mediante notas aclaratorias. Posee la potestad para realizar cambios relacionados con la estructura, título, extensión, redacción y estilo de los trabajos presentados, a favor de la calidad de la Revista.

Los especialistas en asuntos jurídicos y lectores pueden enviar sus opiniones y/o sugerencias a la Redacción de esta publicación.

Apreciado Lector:

Con el presente número continuamos la edición periódica de la Revista “Legalidad Socialista”, órgano oficial de prensa de la Fiscalía General de la República de Cuba.

Esta publicación tiene entre sus objetivos contribuir a elevar la conciencia jurídica ciudadana, mediante la exposición de materiales informativos y de carácter científico – técnico, que permitan fortalecer el cumplimiento de la legalidad, la lucha contra el delito y la protección de los derechos ciudadanos, así como impulsar al más alto nivel la labor de los profesionales del Derecho, en momentos en que nos encontramos inmersos en la actualización de nuestro modelo económico, lo que exige el óptimo esfuerzo y desempeño del sector jurídico.

En la base de todo el quehacer de este sector, deben estar la disciplina, la legalidad y la institucionalidad, pues se están introduciendo cambios de gran importancia para la economía.

Sirva este número de la Revista “Legalidad Socialista” para motivar el estudio, la investigación y la preparación de los juristas, en aras de aplicar nuestros conocimientos a favor del perfeccionamiento del trabajo que realizamos a diario.

Desde este espacio, extendemos una cordial invitación para reflexionar sobre las principales problemáticas que hoy afectan a nuestra sociedad y el papel que nos corresponde desempeñar, para garantizar cada día una justicia ágil, oportuna y de calidad, además de exhortarlos a cooperar en este loable empeño, enviando sus artículos, monografías, ponencias y demás trabajos a nuestra Redacción.

Darío Delgado Cura
Fiscal General de la República

TRABAJADORES DE LA FISCALÍA FIRMAN CÓDIGO DE ÉTICA



(Tomado del periódico Granma, edición del 9 de junio de 2012)

El código de ética fue firmado el día 8 de junio en ceremonias realizadas a lo largo del país por los trabajadores de la Fiscalía General de la República para concretar mayores empeños, con responsabilidad y compromiso, en la batalla por la legalidad.

El acto central, realizado en el memorial Granma, fue presidido por Mercedes López Acea, integrante del Buró Político del Partido y primera secretaria de la organización en la capital, y Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República quien entregó a varios trabajadores certificados acreditativos del sello XXXV Aniversario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), por su relevante quehacer en actividades de la institución.

Juan Escalona Reguera, quien se desempeñó durante años como Fiscal General de la República, expresó orgullo por el ejercicio de los fiscales cubanos, ajenos a la corrupción predominante en otras latitudes, y los exhortó a continuar ofreciendo ejemplos al mundo.

La UNJC, constituida el 8 de junio de 1977, es una organización no gubernamental con personalidad jurídica propia, creada sin ánimo de lucro, autofinanciada y con un perfil científico-profesional.

El día del trabajador jurídico se instituyó el 8 de junio, en homenaje al patriota independentista Ignacio Agramonte y Loynaz, quien en esa fecha, de 1865, defendió su tesis de grado para licenciarse en Derecho.

CUBA DEMUESTRA EN NACIONES UNIDAS SU FIRME COMPROMISO CONTRA LA TORTURA.

(Tomado del Periódico Granma, Edición del 25 de mayo de 2012)



Al presentar su informe ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en virtud de sus obligaciones como Estado parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (22 y 23 de mayo del 2012) Cuba contó con el aval de la obra de justicia construida por la Revolución.

Como es habitual en los exámenes de países, el Comité concentra su atención en temas tan complejos como el estado del sistema penitenciario, el rigor en la impartición y administración de justicia, las garantías para las personas bajo detención y la ética del sistema de orden público. Este órgano de la ONU está compuesto por diez expertos de diversos países que actúan a título personal, y tiene como mandato realizar recomendaciones a los Estados Partes sobre la aplicación de la Convención y la prevención de la tortura o actos afines en todas partes del mundo.

En la actualidad, y a pesar de la existencia de la Convención, la práctica de la tortura no ha desaparecido en varias partes del planeta. Su uso por la fuerzas militares y paramilitares del Gobierno de los Estados Unidos en Iraq, Afganistán, la Base Naval de Guantánamo, las cárceles secretas creadas por la CIA en Europa y otros sitios, es política oficial abiertamente reconocida por ese Gobierno. Asimismo, la brutalidad policial, como se ha podido ver en la represión en países europeos a manifestantes pacíficos y las muertes en prisión de personas encarceladas, constituyen también una constante.

La delegación cubana encabezada por el Vicefiscal General de la República Rafael Pino Bécquer, pudo argumentar, con datos contundentes e incontestables, la aplicación práctica de los preceptos que inspiran a la Convención y su plena coherencia con la filosofía de principios seguida por el Estado cubano con riguroso celo y compromiso y demostró sin que quedara duda alguna, el apego de la Revolución a la aplicación de una política contra la tortura y el abuso.

INTERVENCIÓN DEL VICEFISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA RAFAEL PINO BÉCQUER, EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUBA EN VIRTUD DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (Ginebra, 22 de mayo del 2012)

Señor Presidente:

Distinguidos miembros del Comité:

Tengo el honor de presentar en nombre de mi gobierno el Informe de Cuba en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El documento que sometemos a la consideración del Comité es el resultado de un proceso de consultas amplio y participativo, que involucró a numerosas instituciones gubernamentales y estatales, al Parlamento, a organizaciones no gubernamentales y a otras instituciones cubanas que, de conjunto, realizaron una evaluación objetiva de la aplicación y el cumplimiento de la Convención.

En Cuba, hasta 1959, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes eran la práctica común de las autoridades, lo que alcanzó su clímax en los tiempos de la sangrienta dictadura batistiana. La Revolución Cubana, de profundo contenido humanista y ético, puso fin a esa política de Estado.

El 17 de mayo de 1995, Cuba se hizo Estado parte en la Convención, y ha cumplido con sus postulados y obligaciones contractuales en todo el territorio nacional. Al Estado cubano se le impide el ejercicio de su soberanía en el territorio que ocupa ilegalmente la Base Naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, convertida en un centro internacional de torturas.

Señor Presidente:

Deseo aportar algunos datos sobre el sistema penitenciario y sus condiciones materiales, que es uno de los aspectos sobre los que aún tenemos insatisfacciones.

Al hacerlo, es importante resaltar que, a pesar de las dificultades económicas que como país hemos confrontado, no se ha justificado nunca la negación de la justicia, ni se ha invocado la amenaza de tipo alguno para desnaturalizar o desconocer los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Se encuentra en ejecución el Plan Director de Inversiones para el Sistema Penitenciario que abarca hasta el año 2017, y cuenta con un presupuesto ya asignado que ha permitido asumir, de forma paulatina, la restauración de la infraestructura penitenciaria y mejorar así las condiciones de vida en las capacidades afectadas.

Hasta el presente, se ha reparado un grupo importante de áreas de visitas, cocinas-comedores, aulas para la impartición de docencia, puestos médicos y áreas de atención a familiares. También se ha reparado un número importante de áreas para encuentros íntimos conyugales que, por cierto, es un privilegio distintivo de nuestro sistema.

El Sistema penitenciario cubano incluye entre sus pilares fundamentales el cumplimiento de los 95 preceptos de las “Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos”.

Comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. Está dirigido a propiciar el desarrollo del proceso educativo y estimular la conducta positiva de las personas privadas de libertad mediante la disminución gradual del rigor penitenciario, como base para la posterior concesión de la libertad anticipada. También asegura un adecuado proceso de reinserción social, en especial de los jóvenes, hacia los que se dirigen las principales acciones de atención del sistema penitenciario y de la Fiscalía General de la República, en correspondencia con lo recomendado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Estos programas educativos han tenido un impacto positivo en la población penal. Han influido en el mejoramiento de las relaciones y la comunicación entre los internos y sus familiares, al posibilitar un mayor acercamiento con las personas que los custodian y rehabilitan, y crear un ambiente de superación y mejoramiento humano en las prisiones.

Actualmente el 47 % del total de la población penal se encuentra matriculada en los diferentes niveles de enseñanza. El 43 % del total de la población penal se está capacitando en algún oficio. Desde el año 2002 hasta la fecha, 3 mil 79 internos han concluido estudios universitarios.

El pasado año, en un gesto humanitario y soberano, y en estricto apego a las leyes del país, se concedió el indulto a 2 mil 992 sancionados. Entre estos estaban jóvenes que han elevado su nivel cultural y las posibilidades de reinserción social.

De manera sistemática y en cifras anuales superiores a las comprendidas en este indulto, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y los órganos especializados del Ministerio del Interior, según las regulaciones legales vigentes, evalúan y disponen la excarcelación anticipada de sancionados, atendiendo a su comportamiento, las características de los hechos cometidos y las condiciones familiares y de salud.

Señor Presidente:

La República de Cuba cuenta con un ordenamiento jurídico que regula y ampara los derechos del individuo. En correspondencia con ello, la legislación cubana establece no sólo las garantías jurídicas básicas universalmente reconocidas relacionadas con la protección de los derechos humanos, sino que refrenda garantías materiales para el ejercicio real y efectivo de todos los derechos tanto civiles y políticos, como sociales, económicos y culturales.

El sistema de protección de los derechos humanos no se limita a su formulación normativa y a la vigilancia de su cumplimiento por la institucionalidad establecida. Las políticas y programas para asegurar la protección efectiva y promover la realización real de todos los derechos humanos, son numerosos.

La legislación vigente en Cuba, incluida la que rige la actuación en los lugares de reclusión, contiene las garantías fundamentales universalmente aceptadas para proteger a todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Nuestro Estado toma las medidas necesarias para impedir la ejecución de los actos proscritos en la Convención, por considerarlos un ultraje a la dignidad humana y una violación de las leyes nacionales

y de las normas internacionales en la materia. En la legislación penal existen figuras delictivas específicas que establecen la protección de las personas conforme se estipula en la Convención.

En Cuba no hay ni habrá espacio para la impunidad, ni leyes o reglamentos que la amparen. Como señalan los párrafos 53 y 185 del Informe de Cuba, los actos de tortura y malos tratos están totalmente prohibidos y constituyen delitos tipificados en la ley.

No obstante, no estamos satisfechos con lo logrado. Requerimos seguir avanzando para garantizar todas las precisiones normativas y materiales que prescribe la Convención, y trabajamos en esa dirección. Un ejemplo de ello son los estudios que venimos realizando para la modificación y actualización del Código Penal, con un análisis crítico de sus regulaciones y con una visión integral de los cambios que correspondan hacer, entre los que valoramos la tipificación más explícita del delito de Tortura, con arreglo a la Convención. En diciembre de 2011 la Asamblea Nacional del Poder Popular se pronunció por el perfeccionamiento de las leyes penales.

Tenemos también dificultades y limitaciones materiales con el mantenimiento constructivo de algunas de las instalaciones penitenciarias, lo que afecta las condiciones de vida de algunos de los centros, en los que han incidido, entre otros factores, las dificultades y carencias que nos impone el bloqueo económico impuesto a nuestro país por el Gobierno de los Estados Unidos. Este bloqueo afecta todos los ámbitos de la vida del país y ha tenido un daño económico directo para la economía de 104 mil millones de dólares estadounidenses.

La disponibilidad de los datos estadísticos aún no logra satisfacer el elevado nivel de detalles que exige el Comité. Cabe recordar que es un área de desafío para cualquier país en desarrollo.

Nuestra legislación penal aún no establece específicamente la violencia de género como un delito, sino que sanciona varias conductas delictivas que pueden ser constitutivas de estos actos y de la violencia en su conjunto. Por ello, se nos ha hecho difícil entregar estadísticas desglosadas sobre los casos de violencia de género que han sido procesados.

El tiempo transcurrido desde la presentación de nuestro anterior informe, también constituye un motivo de insatisfacción. Sin embargo, esa demora no significa que se hayan detenido los esfuerzos y las acciones para el cumplimiento de los postulados de la Convención.

Cuba se presenta a este examen en circunstancias especiales. Mi país está sometido a la política de hostilidad que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos dirigida a promover la desestabilización interna y provocar un cambio del orden constitucional escogido libremente por el pueblo cubano, o sea el llamado “cambio de régimen”.

Cuba enfrenta una intensa campaña política y mediática que incluye la pretensión de manipular la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas en función de espurios intereses. En la ejecución de esta campaña, se recurre a la mentira y a la tergiversación de los hechos, con el objetivo de fabricar una matriz de opinión negativa. Alertamos al Comité sobre este importante desafío, en particular cuando se persigue una evaluación objetiva, imparcial y desprejuiciada de la realidad cubana.

En correspondencia con la permanente voluntad de cooperación con las instancias de la maquinaria de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Cuba ha respondido las comunicaciones que de éstas ha recibido. Sin embargo, la ausencia de un escrutinio previo de las fuentes y de la credibilidad

de las alegaciones atenta contra la seriedad y la objetividad del diálogo, así como la cooperación que deben mantener los Estados con esta maquinaria.

Nos tomó tiempo responder la lista de cuestiones enviada por el Comité. La amplia gama de temas abordados en ella, hacía necesaria una extensa consulta nacional.

Algunas de las preguntas parecen haber sido formuladas sobre la base de las alegaciones sesgadas y falsas aportadas por fuentes al servicio de la política de hostilidad contra Cuba que practica el Gobierno de los Estados Unidos.

Para ilustrar la falta de credibilidad de las imputaciones en que se basan determinadas preguntas, me permito ejemplificar que, en la pregunta 22 del cuestionario, se hace mención a algunos supuestos casos de inanición voluntaria. Deseamos aclarar que algunas de esas personas ni siquiera se encontraban detenidas durante el tiempo en que efectuaron estos ayunos voluntarios y otras de las mencionadas nunca hicieron ayuno.

Las normativas que regulan la actuación de las autoridades cubanas ante hechos de este tipo, están alineadas a la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial sobre personas en huelga de hambre y son estrictamente aplicadas. Se brinda en todo momento la atención médica más avanzada con la que cuenta el país, como se hace con cualquier otro ciudadano cubano.

Como se expone en el informe, todas las personas privadas de libertad reciben asistencia médica de forma gratuita y se les garantiza la atención estomatológica.

Señor Presidente:

En la pregunta 26 se solicitan datos estadísticos sobre las denuncias de presuntos actos de tortura o malos tratos.

La Fiscalía General de la República otorga una alta prioridad a la atención y respuesta a las denuncias, quejas y peticiones de los ciudadanos relacionadas con presuntas irregularidades y violaciones de las normas legales, a las que presta oportuna y debida atención con el rigor y la celeridad requeridos.

En el período comprendido del 2007 al 2011 fueron atendidas en la Fiscalía 419 mil 982 personas, las que presentaron denuncias, quejas o peticiones por motivos relacionados con procesos civiles, laborales, penales o administrativos.

De ese total, 263 denunciaron hechos relacionados con malos tratos en centros penitenciarios o locales de detención, los que al investigarse por los órganos de la Fiscalía, resultaron penalmente responsables 46 agentes de las fuerzas del orden.

Señor Presidente:

Con anterioridad, hice referencia a la campaña política y mediática selectiva de la que Cuba es víctima.

Es necesario aclarar algunas de las premisas con que se formula la pregunta 32 del cuestionario. Las personas mencionadas en esa pregunta y en el resto de la lista de cuestiones como supuestos “defensores de derechos humanos”, no califican en ese concepto según lo establecido en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998. Sus acciones y fines socavan y buscan destruir el

ordenamiento jurídico interno cubano, en cuyo marco se deben llevar a cabo todas las actividades de acuerdo a lo estipulado en la Declaración, en su artículo 3. Lo hacen al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera.

En Cuba, los verdaderos defensores de los derechos humanos son protegidos, de conformidad con los postulados de la Declaración.

Nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por ejercer cualquiera de sus derechos, incluidos los de expresión, opinión y asociación, en el marco de las amplias libertades que garantiza la Constitución de la República y sus leyes, plenamente compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Señor Presidente

Distinguidos miembros del Comité,

Como se podrá constatar, Cuba ha trabajado en la aplicación de las recomendaciones realizadas por el Comité en el año 1997.

Deseamos agradecer la posibilidad de establecer este diálogo. Por nuestra parte, continuaremos comprometidos con la implementación de la Convención, empeñados en el perfeccionamiento de nuestra sociedad y la obra de justicia iniciada hace cincuenta años, en aras de fomentar cada día más el disfrute de todos los derechos humanos por todo el pueblo.

Muchas gracias.

.....

Título: “LA CONSUMACIÓN TEMPORAL DEL DELITO. UNA APROXIMACIÓN A LA CONSUMACION RETARDADA”.



Autor: Esp. Dimas A. Herrera Gandol.

I-INTRODUCCIÓN.

El tema relativo a la consumación temporal del delito constituye un asunto de vital interés para la aplicación de las leyes penales, la determinación del instante en que se perfecciona una infracción penal tiene extraordinaria significación jurídica, por su repercusión en la correcta calificación del hecho justiciable.

La parte objetiva del delito, enmarcada en la producción de un daño, real o potencial, a bienes penalmente protegidos, mediante la manifestación de voluntad de un sujeto, se integra por la conducta, el resultado y el nexo causal. La *conducta* es la actuación que se ataca o amenaza al bien tutelado y se expresa en forma de acción (hacer lo que no se debía) y omisión (no hacer lo que se debía); *el resultado* es la lesión o el peligro para el bien jurídico, distinto y separado de la conducta, y *el nexo causal* la relación de causa a efecto, entre la conducta y el resultado.

La fase externa de delito también se caracteriza por tres momentos importantes: los actos preparatorios, la tentativa y la consumación, pudiendo ésta última sobrevenir de forma simultánea, inmediata o con posterioridad a la realización de esa conducta.

Es perfecto el delito, decía Carrara, cuando el hecho ha alcanzado su objetividad jurídica, cuando ha violado el derecho protegido por la ley penal que constituye la esencia del maleficio respectivo. Jiménez de Asúa y Antón Oneca consideraron consumado un delito cuando este se perfecciona objetivamente, cuando el delincuente realizó la lesión jurídica que resolvió ejecutar su voluntad; mientras que Rodríguez Devesa lo estimó como la ejecución íntegra de la conducta tipificada por la ley.

El artículo 3 del Código Penal de 1879, estableció la punición del delito consumado, sin definirlo, lo que hizo el Código de Defensa Social (Art. 26.A), considerando consumado un delito cuando el acto querido por el agente se hubiera producido en su totalidad. Los códigos penales de Guatemala (Art. 13) y Honduras (Art. 14), estiman consumado un delito al concurrir en él todos los elementos de su tipificación legal.

El vigente Código Penal estableció en su artículo 12.1, como sancionables el delito consumado y la tentativa, sin describir al primero; opinando algunos autores que es innecesaria la definición, al estar enunciada en las respectivas figuras típicas, lo que no asumo, pues aunque lo real rebasa siempre el concepto que intenta contenerlo, como afirmaba Ortega y Gasset, la consumación, como todo fenómeno, merece un concepto general al servicio de su determinación casuística.

Toda consecuencia se encuentra vinculada de forma indisoluble a la causa que la provoca, entre un acto y su resultado existe una relación de causa a efecto, pero al mismo tiempo, entre ese acto y ese resultado, vinculados por un nexo causal, puede existir una instantánea, permanente o tardía relación temporal, según se manifieste en sucesión inmediata, simultánea o posterior.

Cuando entre la realización de la conducta delictiva y la producción del resultado existe una inmediata relación temporal, se produce lo que conocemos como un delito de consumación instantánea, pero cuando la conducta y el resultado persisten en el tiempo, se origina entonces un delito de consumación permanente; derivándose que la consumación puede ser, por su naturaleza, lo mismo un momento que un período.

La denominación de delitos instantáneos y permanentes se fundamenta teóricamente en que, en unos se realiza puntualmente una conducta y sobreviene al instante un resultado y en otros se

verifica una persistencia de conducta y de resultado; pero no existe explicación doctrinal convincente para los casos en que la conducta y el resultado se encuentran notoriamente separados en el tiempo; lo que se manifiesta en el delito de asesinato, considerado como instantáneo lo mismo si la muerte ocurre al instante o varios meses después de ejecutada la acción delictiva.

Por ejemplo, si un sujeto, aprovechando que la víctima se encuentra dormida, le inyecta sangre contaminada con el VIH para privarla lentamente de la vida, logrando que ésta muera por esa causa un año después, no parece discutible, de acuerdo al medio empleado, el propósito perseguido y la relación de causalidad, que se trata de un delito de asesinato (Art. 263-b-c-ch CP), porque inyectar sangre infectada con el VIH a otra persona, con pleno dominio de las consecuencias del acto, queridas por demás, revela el propósito de matar, que es el resultado lógico derivado de tal acción, aunque medie el transcurso del tiempo entre el acto y el resultado.

Y es que el SIDA plantea un reto para los sistemas legales, al tener características que lo distingue de otras enfermedades: la infección dura toda la vida y genera un proceso patológico de pronóstico irremisiblemente fatal por no existir, hasta hoy, cura para él. En esta modalidad de transmisión pasan directamente a la sangre y a los órganos fundamentales, mayores cantidades de virus sin atravesar las barreras naturales de defensa del organismo, acortando las posibilidades de vida a solo meses en algunos casos; siendo evidente que, a quien se ataca y a quien se destruye finalmente, como bien jurídico supremo, es a la vida.

Aquí pudieran presentarse interesantes situaciones procesales, pues el encargado de impartir justicia se enfrenta a un complejo escenario en la que una causa pasada y una consecuencia futura palpan estrechamente unidas por una relación de causalidad. La tentativa parece haber quedado atrás; se practicaron todos los actos necesarios e idóneos y el resultado se va a producir inevitablemente un día, pero no hay todavía consumación, la víctima no ha muerto y razones de tipicidad impiden calificar por un estadio que, aunque seguro, no ha ocurrido.

Si meses después de cometido el acto, se acredita que la víctima fue contagiada con el VIH, el proceso pudiera definirse con la imputación de dos posibles delitos. La propagación de epidemias consumada en su modalidad agravada (Art. 187.3 CP) si se demuestra solamente que el autor debió representarse el resultado (dolo eventual), porque la muerte no ha ocurrido, o asesinato en grado de tentativa (Art. 263-b-c-ch en relación al 12.2 CP), si se acredita la específica intención de matar (dolo directo).

Pero si en el acto del juicio oral, llega al Tribunal la noticia del reciente fallecimiento de la víctima por dicha causa, procederá disponer, de oficio o instancia del Fiscal, una sumaria instrucción suplementaria (Art. 351 LPP), cuyo cumplimiento posibilitaría finalmente la imputación del delito de asesinato consumado (Art. 263-b-c-ch CP).

¿Podría justificarse este caso desde el punto de vista de la consumación instantánea o permanente?. Por supuesto que no, sería un contrasentido hacerlo. Resultado es consumación y la consumación que no ocurra de inmediato no es instantánea. Si es diferido el resultado, es diferida la consumación; es axiomático que no puede existir consumación instantánea y resultado diferido, ello

equivaldría a decir que resultado y consumación son cosas distintas, cuando en verdad son lo mismo, con identidad en el tiempo y en el espacio, de acuerdo a los principios de contemporaneidad y ubicuidad.

Por ello estimo que la clasificación de los delitos, bajo el prisma de la perfección temporal, debe ser la de *permanentes; instantáneos y retardados*.

II-DELITOS DE CONSUMACIÓN PERMANENTE.

Permanente es lo que se extiende en el tiempo, lo perenne; de duración simultánea o paralela y con perseverancia; lo constante y estable; subsistente, habitual, duradero, perpetuo, sostenido, fijo, persistente, concurrente, coetáneo y continuo; que se mantiene sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad; condición de estar en algún sitio durante cierto tiempo y que dura o puede durar mucho.

En los delitos permanentes se expresa una coexistencia temporal sincrónica, de actos y resultados. La manifestación de la voluntad y el resultado son coetáneos y, aunque se les nombra indistintamente delito continuo o sucesivo, la denominación de delito permanente es la más utilizada en la doctrina y la práctica judicial.

Según Quirós, el delito permanente se caracteriza por la prolongación ininterrumpida de la consumación, sin solución de continuidad durante un tiempo más o menos extenso, la perdurabilidad de la conducta del sujeto mientras dura la consumación y la posibilidad de que el sujeto, voluntariamente, haga cesar la consumación.

Campus los identificó como la violación de derechos que por su naturaleza no podían ser destruidos o disminuidos, sino solamente obstaculizados en su ejercicio o en su realización, prorrogándose por un tiempo más o menos largo bajo formas de un hecho continuo; sosteniendo que hay objetos del delito que son destruibles, en términos jurídicos, y otros que solo pueden sufrir contracción o compresión; correspondiendo el primer caso a los instantáneos y el segundo a los permanentes, por lo que el delito permanente debe recaer siempre sobre bienes inmateriales.

Antolisei los definió como aquellos en que el hecho que los constituye da lugar a una situación dañosa o peligrosa prolongada en el tiempo a causa de la perduración de la conducta del sujeto. En estos la conducta ejecutiva (acción u omisión), ocasiona un perjuicio posible (potencial) al bien penalmente protegido.

Siguiendo a los autores consultados, todos los actos con que se prolonga el estado consumativo en los delitos permanentes deben ser considerados como una unidad de conducta. El carácter duradero de este delito resulta decisivo en la determinación del momento en que propiamente se considera consumado, aspecto sobre el cual se han expuesto, fundamentalmente, tres criterios:

El primero lo ubica en el instante en que se inicia el resultado, imposibilitando su distinción con el instantáneo; el segundo en el momento en que cesa el resultado, considerando irrelevante lo

anterior, estimado como tentativa; siendo correcto el tercero, que identifica el momento consumativo con el período comprendido desde el instante en que el infractor ha actuado o ha omitido la obligación de actuar y se prolonga hasta el cese del estado antijurídico, denominado tiempo de permanencia, de gran importancia por sus implicaciones sustantivas y procesales.

Los delitos de posesión, algunos propiamente actos preparatorios de otros delitos, son aquellos en que la parte objetiva se caracteriza por el “tener o mantener en su poder, poseer o portar” y se consuman desde el instante en que se tiene o en que se porta, pero la permanencia en el tiempo de la conducta y el resultado, los sitúa en el ámbito de la consumación permanente. Estas conductas se describen en diferentes artículos del Código Penal: tenga en su poder: (Art. 97.3; 166.1; 211.1; 213; 214; 250.2; 251.2; 252.2; 253.2; 255-b-c; 227-d; 259.2 y 330.1); mantenga en su poder: (Art. 185-ch y 236); posea: (Art. 103.1) y porte: (Art. 211.1 y 214).

Cuando se omite el cumplimiento de una obligación, sin estar el sujeto impedido de hacerlo, persistirá la conducta y la producción del resultado mientras tenga vigencia la obligación de hacer y, consecuentemente, habrá consumación permanente, como en el incumplimiento del deber de denunciar (Art. 161.1 CP), donde subsistirá la omisión y el resultado antijurídico, hasta que se realice la denuncia en el término de prescripción, o sea inculpado el autor por no haberlo hecho, o en la insolvencia punible (Art. 337.1 CP), desde que el deudor se alce con sus bienes para sustraerse del pago de sus obligaciones, hasta que exista posibilidad de cumplirlas.

Los delitos permanentes, por acción u omisión, serán *necesariamente permanentes*, cuando requieran siempre para su integración una actividad extendida en el tiempo, como la privación de libertad (Art. 279.1 CP); *eventualmente permanentes*, si se integran con la definición de sus elementos constitutivos y al mismo tiempo pueden dilatarse, sin dar lugar a diversos delitos, como la usurpación de funciones públicas (Art. 148.2 CP) y; *alternativamente permanentes*, con dos modalidades de comisión, como la violación de domicilio (Art. 287.1 CP), con una instantánea (penetrar) y otra permanente (permanecer).

III-DELITOS DE CONSUMACIÓN INSTANTÁNEA.

Se caracterizan por la coincidencia temporal entre la manifestación de voluntad y el resultado. Manzini los definió como los que, en el momento mismo en el cual se concretaban los elementos constitutivos del delito, se producía un efecto positivo y directo, material o moral, que podía desaparecer inmediatamente o sobrevivir a la cesación de la actividad o inactividad criminal, pero en modo de no hacer posible en ningún caso la prolongación ininterrumpida de esa actividad o inactividad.

El Código Penal Federal de México, en su artículo 7.I, establece que el delito es instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos.

Lo instantáneo puede delimitarse como lo que se produce inmediatamente; que se ejecuta al instante; la reacción y efecto instantáneo; que pasa en seguida, prontamente y sin dilación; de muy

corta duración; momentáneo, de golpe, de pronto, rápido, breve y repentino; en suma, el vínculo consecutivo de un acto y su resultado.

Delito instantáneo será la falsificación de documentos públicos (Art. 250.1-a CP), porque la consumación se define en el momento en que se confecciona un documento público falso o se altera uno legítimo, con independencia del uso que se le dé. Lo mismo ocurrirá con la bigamia (Art. 306 CP); el matrimonio ilegal (Art. 307 CP) o la asociación para delinquir (Art. 207.1 CP), que son de efectos permanentes, pero se perfeccionan con la formalización o la asociación.

Algunos delitos del Código Penal, de acuerdo a su formulación legal, se perfeccionan instantáneamente con un acto que en otras circunstancias sería solo una tentativa, como realizar actos tendentes a salir del territorio nacional (Art. 216.1), intentar introducir o extraer del país objetos o mercancías (Art. 233-a-b); intentar extraer del país bienes declarados integrantes del patrimonio cultural (Art. 244.1); intentar realizar operaciones de conversión o transferencia de recursos, bienes o derechos a ellos relativos (Art. 346.1) y otros.

Lo instantáneo de esta clase de delitos se refiere igualmente a la imposibilidad de hacer cesar el resultado antijurídico, por la acción del autor, una vez que el mismo se ha consumado, porque pierde el dominio sobre las consecuencias una vez ocurridas. Cometida la apropiación, es imposible suprimirla jurídicamente; la recuperación del bien por el propietario solo dispensa la responsabilidad civil, pero no el delito.

Manzini recomienda no confundir la permanencia de los efectos de un delito con la permanencia del delito mismo. El homicidio, el hurto, la bigamia o el matrimonio ilegal, se consideran delitos instantáneos, aún cuando sus efectos sean permanentes. Estos se consuman con la muerte, la sustracción y la formalización del matrimonio; todo lo que sobrevenga carece de relieve jurídico penal. El dueño de los bienes sustraídos puede recuperarlos o continuar desposeído de ellos, pero en ambos casos el proceso de ejecución del delito fue concluido.

Hasta aquí, todo parece claro, los criterios doctrinales son unánimes. La confusión comienza cuando los autores recomiendan no interpretar, en sentido gramatical la denominación de delito instantáneo, para justificar como tal todos aquellos donde después de haberse culminado la acción, necesitan el transcurso del tiempo para su consumación, siendo ejemplo el sujeto que tras haber recibido un disparo homicida fallece, varios meses después, en el hospital donde era atendido, a causa del disparo.

Mi criterio es que casos como este no concuerdan con los requisitos del delito instantáneo, ni mucho menos con el permanente, debiendo resolverse el problema con la conceptualización de los *delitos de consumación retardada*.

IV-DELITOS DE CONSUMACION RETARDADA.

La inmediata sucesión temporal entre la acción y el resultado no deja lugar a dudas para calificar de instantáneo un determinado delito. Los inconvenientes se originan cuando entre el acto de voluntad y

el resultado, unidos indisolublemente por una relación de causa a efecto, transcurre un amplio lapso de tiempo, sin intervención de la voluntad del autor, considerándose que se trata de delitos de resultado diferido, lo que resulta inconsecuente con las propias definiciones del delito instantáneo.

Tres criterios se han vertido sobre el momento en que se estima cometido un delito. El criterio del acto lo determina por el instante en que se manifiesta la voluntad; el criterio del resultado cuando ocurre el efecto y; el criterio mixto, considera tanto el instante en que se ha actuado, como el de las consecuencias.

Nuestro Código Penal, en su artículo 15.2, se afilia al criterio del acto, al considerar cometido un delito en el momento en que el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca. En este sentido se pronuncian los códigos penales de Colombia (Art. 20), Costa Rica (Art. 19); Guatemala (Art. 19); Honduras (Art. 18), Panamá (Art. 18), Perú (Art. 9), El Salvador (Art. 12) y Paraguay (Art. 10).

El artículo 15.1 del Código Penal, define que el lugar de la comisión de un delito es aquél en el cual el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar, o en el que se produzcan sus efectos; en tanto que el artículo 4, inciso 4, al regular la eficacia de la ley penal en el espacio, establece que un delito se considera cometido en territorio cubano si el delincuente realiza en él actos preparatorios o de ejecución, aunque el resultado se haya producido en el extranjero, o viceversa; afiliándose estos preceptos al criterio mixto o de ubicuidad, que acepta el lugar del acto y el del resultado y es refrendado por los códigos penales de Colombia (Art. 13), Costa Rica (Art. 20), Guatemala (Art. 20), Honduras (Art. 19), El Salvador (Art. 12) y Paraguay (Art. 11).

Estas previsiones legislativas, concibiendo la posibilidad de separación temporal del acto de voluntad y del resultado (tiempos de comisión y de consumación), sin negar las definiciones del delito instantáneo y del permanente, admiten y justifican la consumación retardada, convirtiéndose en sustento legal de nuestra tesis.

Retardado es todo lo que demora en llegar a su desarrollo normal; significa dilatado, prorrogado, postergado, aplazado, diferido, demorado, alongado, dilatado, pospuesto y tardío. El delito de consumación retardada presupone la existencia de una relación asincrónica, por la falta de coincidencia en el tiempo, entre el acto y el resultado, como consecuencia de una interrupción temporal de la cadena causal.

La relación de causalidad, concepto importado de las ciencias naturales, expresa una conexión necesaria entre un antecedente (causa) y un consecuente (efecto) y, aunque para su configuración no tiene porque tenerse como factor determinante el tiempo, lo cierto es que el factor tiempo es decisivo para la calificación definitiva de la acción. Cuando la conducta pueda escindirse temporalmente del resultado, el delito solo se consumará con la producción de éste.

Quirós afirma que lo posible es solo una etapa en el desarrollo del proceso causal que conduce a lo real, y tiene razón, porque solo cuando lo posible se convierte en real, cuando los actos ejecutivos idóneos para la producción de un resultado lo ocasionan, se puede reputar un delito como consumado.

Para que un asesinato se estime consumado, no basta realizar la acción dirigida a privar de la vida a una persona, sino que se requiere causar, efectivamente, la muerte, que si acontece de inmediato no existen inconvenientes para adjudicarle la condición de instantáneo, pero si ocurre meses después, el termino instantáneo no concuerda, ni gramatical ni jurídicamente con la realidad, siendo necesario distinguir comisión de consumación y, consiguientemente, tiempo de comisión de tiempo de consumación.

Cuando se completan todos los actos ejecutivos idóneos para provocar un resultado y este no sobreviene de inmediato, estaríamos en todo caso, hasta tanto se produzca, en presencia de una tentativa acabada. El tiempo marca una línea divisoria, un compás de espera, entre la tentativa acabada y la consumación, siempre que exista, entre esos actos y ese resultado final, una relación directa de causa a efecto. Se trata de un punto donde los actos ejecutivos son irreversibles y el resultado es inevitable, solo factores ajenos permiten una solución de continuidad momentánea a la cadena causal.

El envenenamiento de algún alimento para que la víctima lo ingiera, es una tentativa del delito de asesinato; la consumación, o más propiamente el momento consumativo, depende de la víctima; entre la voluntad de matar y la muerte, entre el acto y el resultado, unidos causalmente, transcurre una determinada cantidad de tiempo.

Se administran pequeñas dosis de veneno a la víctima, logrando su muerte tras el suministro de la última dosis (delitos de ejecución compuesta); la carta que contiene injurias llega al injuriado meses después de enviada (delitos a distancia) y, entre el momento en que la madre deja de alimentar al recién nacido para provocar su muerte y la ocurrencia de ésta, transcurren varios días (delitos de comisión por omisión).

De estar prevista una condición objetiva de punibilidad, o más exactamente una impropia condición objetiva de punibilidad, por ser la que nos interesa, el delito solo se consumará al verificarse dicha condición, que sin interferir en la punibilidad del hecho ni la culpabilidad, define la agravación o atenuación de la pena, lo que supone una posible escisión entre la comisión del delito y la causación del resultado.

Entre las impropias condiciones de punibilidad previstas en el Código Penal pudieran relacionarse el considerable valor: (Art. 328.2-ch; 334.3; 335.2; 336.2 y 338.3-b); los graves perjuicios: (Art. 154.2; 155.2; 156.2; 322.2-d; 326.2-a y 334.3); el limitado valor: hurto (Art. 323; 329.1; 336.3 y 339.3); los perjuicios de consideración: (Art. 224.3); la producción de lesiones corporales o daños a la salud: (Art. 296.2, 327.3-c.5-c; 298.3-b y 299.2-b); y la muerte de la víctima: (Art. 269 y 275.3).

Los delitos de acción y resultado, que prohíben tanto la conducta activa como la producción del resultado (revelación de secreto administrativo, de la producción o de los servicios, Art. 129.1.2 CP), pueden consumarse instantáneamente en el primer supuesto y de forma retardada en el segundo, cuando la afectación se produce con posterioridad a la realización de la conducta activa.

Los llamados de *conducta indiferente*, concepto anfibológico divorciado de los delitos de intención, se asocian al incumplimiento de regulaciones: (Art. 140.b CP); de obligaciones: (Art. 170.1 y 220.1 CP); de trámites: (Art. 171.2 CP); de medidas: (Art. 187.1; 193 y 222.1 CP) y disposiciones: (Art. 194.1.c y 237.1 CP). En estos casos la parte dispositiva, referida a “incumplir o infringir”, los relaciona con la consumación instantánea, pero pudiera ser retardada cuando el incumplimiento se asocie a la producción de un resultado escindido de la manifestación de conducta, como en los actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación (Art. 140.b.2 CP) e infracción de las normas para prevenir y combatir enfermedades y plagas de animales y plantas (Art. 237.1 y 3 CP).

En los delitos de expresión o de manifestación son figuras en las cuales la declaración constituye el medio de comisión, como la denuncia o acusación falsa (Art. 154.1-a) y perjurio (Art. 155.1 CP). En ambos casos la modalidad básica se consume al instante de hacer la denuncia o acusación falsa o realizar el perjurio (instantáneas), pero las modalidades previstas en sus apartados segundos se perfeccionan con la posterior causación de un perjuicio (retardadas).

En los llamados delitos preterintencionales de configuración legal, la propia fórmula del Código determina la preterintención, como la ocurrencia de la muerte en el aborto ilícito (Art. 269), el abandono de menores, incapacitados y desvalidos (Art. 275.3) y la privación de libertad (Art. 279.3), siendo común observar en estos casos un distanciamiento entre la conducta y el resultado querido con el resultado provocado.

No existen inconvenientes para afirmar que en determinados delitos impudentes, una vez realizada la conducta (por acción u omisión), es posible apreciar una separación temporal entre la conducta y el resultado, como pudiera ser un homicidio cometido en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas (Art. 177 CP), cuando la muerte se verifique con posterioridad a la ocurrencia del accidente.

Esa separación temporal de conducta y resultado será igualmente posible en aquellos delitos en que la propia formulación legal exija, para su perfección, un determinado comportamiento de la víctima, como en las amenazas (Art. 284.1 CP), la extorsión (Art. 331 CP) y en la estafa (Art. 334.1 CP), donde una vez realizadas las acciones ejecutivas por parte del autor, habrá que esperar su impacto externo para considerar consumado el delito. Solo cuando la víctima sienta serio y fundado temor, en las amenazas; cuando se entregue la escritura o documento, se contraiga la obligación, se condone la deuda o se renuncie a un derecho, en la extorsión; o cuando inducida al error haya determinado realizar o abstenerse de realizar el acto en detrimento de los bienes, en la estafa, se habrá completado en el tiempo la figura típica.

Estos casos pudieran explicarse mejor con la conceptualización de los *delitos de consumación retardada* que, a mi juicio, ocurren cuando se practican todos los actos idóneos para producir un resultado típico y éste se produce en un momento posterior, de forma inevitable. Existe relación de causalidad, pero los efectos dependen del tiempo para manifestarse, sin que la voluntad humana pueda impedir su ocurrencia, aunque si retardarla.

La característica diferencial entre el delito retardado y el instantáneo radica en los distintos momentos en que se produce la consumación después de haberse ejecutado la acción u la omisión;

mientras que la particularidad del retardado respecto al permanente se ubica en la no prolongación de la conducta y que el resultado ocurre en un momento específico, no en un período de tiempo.

Un delito *necesariamente retardado* pudiera ser el de actos hostiles contra un Estado extranjero (Art. 110.1.2 CP), que exige la repercusión causal posterior a la realización de la conducta. El homicidio (Art. 261 CP) puede ser *eventualmente retardado*, al admitir tanto la consumación retardada o la instantánea; en tanto que el delito de lesiones (Art. 272.1.2 CP), es *alternativamente retardado*, al señalarse en la ley dos modalidades de consumación, instantánea cuando ocurre el peligro inminente para la vida y retardada cuando requiere el transcurso del tiempo para determinar la deformidad, incapacidad o cualquier secuela anatómica, fisiológica o psíquica.

V-CONCLUSIONES:

Aunque todo lo expresado puede, y debe, ser perfeccionado y enriquecido, considero que el delito de consumación retardada merece categoría de figura autónoma que lo identifique como tal y lo individualice de aquellos cuya consumación, desde el punto de vista temporal, pueda ser instantánea o permanente.

Esta proposición, que germinó desde los imprecisos contornos de una idea, se anima en razones de utilidad práctica, se sustenta en las consideraciones teóricas expuestas y se ampara en la formulación legislativa de los artículos 4, apartado 4, y 15, apartados 1 y 2, del Código Penal.

BIBLIOGRAFÍA:

- 1-“Derecho Penal Especial”, Tomos 1y II, Colectivo de Autores, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005.
- 2-Francisco Muñoz Conde, “Derecho Penal”, Parte Esp. 8va. Edic. Valencia, 1990.
- 3-P.I. Grishaiev y B.V. Zdravosmilov, “Los Estadios de la Comisión del Delito”, Revista de Divulgación Jurídica No. 35, Año 5, 1987.
- 4-Renén Quirós Pirez, “Introducción a la Teoría del Derecho Penal”; Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987.
- 5-Luis Jiménez de Asúa y José Antón Oneca, “Derecho Penal”, Tomo I, Editorial Reus S.A., Madrid, 1929.
- 6-Armando M. Reggi, “Derecho Penal Cubano. El Código de Defensa Social”, Tomo I, La Habana, 1938.
- 7-Antonio Cejas, “Declaración Jurisdiccional de la Responsabilidad Penal”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989.
- 8-Renén Quirós Pirez, “Unidad y Pluralidad de Delitos”, Revista Jurídica No. 1.
- 9-Ángel G. Betancourt, “Código Penal de 1879”, 2da Edición, La Habana, 1922.
- 10-Rafael Pérez Lobo, “Código de Defensa Social”, Cultural S.A, La Habana, 1953.
- 11-Eugenio Zaffaroni, “Tratado de Derecho Penal”, Parte General, Tomos I, III y IV, Editorial Cárdenas, México, 1988.
- 12-José A. Grillo Longoria, “Los Delitos en Especies”, Tomo II, Ediciones Jurídicas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1982.
- 13-Renén Quirós Pirez, “Manual de Derecho Penal”, I y II, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002.

14-José María Rodríguez Devesa, "Derecho Penal Español", Parte General, Segunda Edición, Madrid, 1971.

15-Diccionario Microsoft® Encarta® 2009.

LEGISLACION CONSULTADA:

1-Códigos penales de Cuba, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Perú, Panamá, España, Ecuador y Federal de México, en versión digital.

.....

Título: "PARTICULARIDADES DE LAS CONDUCTAS CRIMINÓGENAS DONDE SE INVOLUCRAN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES EN EL CONTEXTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS"



Autora: Esp. Lidia Estévez García

Las conductas criminógenas de forma general es un tema que requiere de constante estudio, si a ello se añade el desarrollo constante de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones y su influencia en todas las esferas de la sociedad; resultaría muy interesante investigar las formas y particularidades de dichas conductas al involucrarse las tecnologías, las que facilitan y garantizan en cierta medida el éxito de las mismas.

Al considerar las proyecciones de Cuba reflejadas en el proceso de informatización de la sociedad, se debe reflexionar sobre el papel que desempeña las investigaciones criminológicas como herramienta de prevención sobre la tendencia de determinadas conductas ilícitas con el uso de las tecnologías. Esta investigación permite conocer un problema que desde hace muchos años está enfrentando la sociedad en su sentido más amplio y las personas jurídicas en su conjunto.

Las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones abren nuevos y versátiles caminos que imponen con premura la realización de cambios en pos del desarrollo de una cultura informática, dirigida a elevar cada día las medidas de seguridad y el control de los servicios que se brindan o explotan.

La evolución constante y la alta demanda de adquirir tecnologías, ha traído como consecuencia que los programadores de software, en muchas ocasiones, confinen la seguridad a una segunda prioridad y existan los llamados huecos de seguridad que se van remediando paulatinamente con los parches, pero que no siempre son efectivos y actualizados.

La seguridad de las Tecnologías de la Información y por ende de la Informática, se convierte en un tema de crucial importancia para el continuo y espectacular progreso de la sociedad e incluso para su propia supervivencia, por lo que la Seguridad de la Información se convierte en una condición necesaria a alcanzar por el país para garantizar la protección de la información, frente a las acciones que pongan en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma.

Profundizar, pero por sobre todas las cosas, analizar y demostrar sobre la base de argumentos sólidos, es el fin inmediato que se pretende con el contenido de este trabajo. Se describe un fenómeno, un hecho y se trazan recomendaciones, que lejos de ser simplistas y abstractas, se presentan sobre la base de la práctica de nuestras posibilidades.

Esta investigación permite conocer, desde el punto de vista criminológico, un problema que desde hace muchos años está enfrentando la sociedad en su sentido más amplio y las personas jurídicas en su conjunto, motivado por la implementación y desarrollo de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en la economía nacional y su empleo para beneficio propio, lo que conduce a conductas criminógenas donde se involucran dichas tecnologías y pretende aportar una visión particular de cómo se involucran las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en el contexto de las personas jurídicas, ya sea como conductas ilícitas o antisociales, reafirmando la necesidad de alcanzar una cultura sobre Seguridad Informática que propicie en todos los trabajadores que sean usuarios o no de estas tecnologías, la formación de una conciencia en el tratamiento de la información digital, el uso adecuado y ético de los recursos informáticos puestos a su disposición para ser más eficientes en el trabajo diario.

En la actualidad, las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones se utilizan no solo como herramientas auxiliares de apoyo a diferentes actividades humanas, sino como medio eficaz para obtener y conseguir información, lo que las ubica también como un nuevo medio de comunicación y condiciona su desarrollo de la Informática; tecnología cuya esencia se resume en la creación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.

La Informática está hoy presente en casi todos los campos de la vida moderna. Con mayor o menor rapidez todas las ramas del saber humano se rinden ante los progresos tecnológicos, y comienzan a utilizar los sistemas de Información para ejecutar tareas que en otros tiempos realizaban manualmente.

Con la evolución de la criminalidad y su adecuación a los cambios económicos y tecnológicos se ha hecho necesario ampliar o extender la visión de la víctima a las personas jurídicas; por cuanto la delincuencia desde hace tiempo comenzó a operar en los planos cibernéticos, financieros, económico-especulativos.

Es por ello que detenerse a profundizar en las conductas criminógenas donde se involucran las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en el contexto de las personas jurídicas, es factible de investigar, toda vez que se pretende exponer y demostrar esta problemática para prever las consecuencias nocivas que trae aparejado el uso indiscriminado de la tecnología con la considerable

afectación a las entidades estatales como víctimas de estas conductas, sin obviar los beneficios en el tratamiento de los datos e informaciones, sin embargo, tales beneficios constituyen a la vez un motivo de preocupación, pues la información ha resultado otra posibilidad de realizar actos indebidos, repudiados y amargamente dañinos contra la sociedad de forma general.

A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la Informática en la vida diaria de las personas y organizaciones, y la importancia que tiene su progreso para el desarrollo de un país. Las transacciones comerciales, la comunicación, los procesos industriales, las investigaciones, la seguridad, la sanidad, etc. son todos aspectos que dependen cada día más de un adecuado desarrollo de la tecnología informática.

En estos momentos las computadoras se utilizan no solo como herramientas auxiliares de apoyo a diferentes actividades humanas, sino como medio eficaz para obtener y conseguir información, lo que las ubica también como un nuevo medio de comunicación y condiciona su desarrollo de la informática; tecnología cuya esencia se resume en la creación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.

Se debe considerar que la vinculación de las conductas criminógenas y la forma de utilización de las tecnologías es un tema aceptado en todos los países, en muchos de ellos se contemplan de alguna forma los Delitos Informáticos.

En Cuba existen tipicidades con un nivel de incidencia demostrado donde las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones se han visto involucradas, ya sea, *como instrumento u objeto del delito, o simplemente en la aportación de evidencias informáticas que demuestran la relación víctima - comisor – delito*. Haciendo un análisis del planteamiento anterior, cabe decir que esas conductas son factores criminógenos, de gran peligrosidad social, teniendo en cuenta siempre el bien jurídico afectado y el daño causado, así como las particularidades impuestas por el comisor a partir de su conocimiento y posibilidades para garantizar el éxito en la comisión del hecho delictivo.

La falta de tipicidad impide hablar de Delitos Informáticos y deja inmersas estas acciones en la nebulosa de los diferentes injustos penales. Es necesario adoptar la naturaleza del bien jurídico lesionado, para dar cobertura jurídica a aquellas conductas relacionadas con la Informática donde ésta aparece como medio o como objeto de la agresión. En tal sentido utilizando los tipos penales tradicionales como la estafa, robo, daño... dar entrada a los ilícitos informáticos. No obstante, algunos tipos dejan traslucir la protección de un nuevo bien jurídico, la información tratada automáticamente, aunque sea a través de un tipo tradicional.

No obstante, la diversidad de conceptos sobre Delito Informático o Criminalidad Informática, se debe considerar que para esta investigación serán estudiadas aquellas **conductas criminógenas donde se involucren las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en el contexto de las personas jurídicas**, ya sea como conductas ilícitas o antisociales.

En el ámbito internacional existen 3 criterios que demuestran las vías asumidas por varios países para contrarrestar este fenómeno:

1. Los delitos tradicionales pueden dar respuestas a los delitos donde se involucran las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones y que sólo hay que hacerles algunas modificaciones a determinadas figuras delictivas.
2. Se consideran nuevas conductas, que obligan a conformar una legislación independiente.
3. Posición mixta. Esta posición se soporta en que existen figuras delictivas tradicionales que una vez se les introduzcan modificaciones pueden darle respuesta a esas conductas por el bien atacado, así mismo hay conductas novedosas relacionadas con el ataque a la seguridad y protección de la Información que es necesario imponerlas como una nueva norma jurídico penal.

Estos criterios constituyen una muestra de las tendencias en el necesario cambio jurídico a efectuar a partir de la incidencia de las TI en el contexto delictivo.

En Cuba este cambio se materializa a partir de las modificaciones realizadas al Código Penal, en su parte especial, a partir del Decreto Ley 87 del 16 de febrero de 1999, en el que se realizan modificaciones a varias tipicidades delictivas, pero de forma especial se introduce en el artículo 328 inciso 1 b) en el que se sanciona con privación de libertad de tres a ocho años al que sustraiga una cosa mueble de ajena pertenencia, con ánimo de lucro, concurriendo en el hecho alguna de las circunstancias siguientes:

b) uso de llave falsa, o uso de la verdadera que hubiese sido sustraída o hallada, o de ganzúa u otro instrumento análogo. A estos efectos, se consideran **llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas**, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia, u otros de iguales propósitos.

El elemento más cuestionado en la actualidad respecto a la Informática, es la seguridad en la generación, almacenamiento, procesamiento, recopilación y transmisión de la información o en la utilización de redes y aplicaciones, es decir, en cómo crear un sistema de normas jurídicas que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información sobre la base de un adecuado uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones.

Es por ello que se debe tener en cuenta que para cada bien informático a proteger se debe garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, por lo que determinar cada amenaza sobre la base de cómo pueda afectar a estos principios permite que la información mantenga su valor desde el punto de vista jurídico. Por supuesto, el peso que cada uno de estos principios tiene para los activos o recursos varía de una entidad a otra, en dependencia de la naturaleza de los procesos informáticos que se llevan a cabo en función del objeto social de cada entidad. Algunas de las amenazas más comunes son las siguientes:

- Destrucción de información.

- Corrupción o modificación de información.
- Interrupción de procesos de control de accesos y servicios.
- Divulgación de información.
- Hurto, traslado o pérdida de activos y/o recursos.

Una acción para contrarrestar este fenómeno resulta alcanzar la necesaria cultura sobre el uso correcto de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones, educar y persuadir a todos los trabajadores como usuarios de las tecnologías, sobre la importancia de dar un uso adecuado y ético a los recursos informáticos que la empresa pone a su disposición, con el fin de ser más eficientes en el trabajo y elevar la preparación profesional. Es decisiva esta batalla, pues resulta imprescindible que cada trabajador esté consciente, que el uso adecuado de los equipos, redes y sistemas constituye una forma más de luchar contra las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción desde su puesto de trabajo.

A la falta de una cultura sobre el uso correcto de esta tecnología y la falta de exigencia de los directivos, agregamos las deficiencias detectadas a través de las auditorias a la Seguridad de las Tecnologías, entonces cómo evitar que subsistan problemas como estos:

- Insuficiente control de las redes y sus servicios.
- Insuficiente selección y verificación del personal.
- Deficiente registro y revisión de los eventos en redes.
- No se realizan salvallas de la información.
- Administración remota de redes mediante conexiones conmutadas.
- Falta de control en la asignación de cuentas de acceso a los servicios.
- Cuentas de correo en servidores en el extranjero.
- Suscripciones a Listas de Correo Electrónico y empleo de servicios de Chat sin autorización ni control.
- Deficientes acciones para evitar la introducción y propagación de programas malignos.
- No se reportan los incidentes ni se preservan las evidencias.

Por estas razones resulta necesario considerar algunos datos estadísticos sobre la incidencia de las tecnologías en las conductas criminales en la esfera de las personas jurídicas. Se debe tener en cuenta que estos datos provienen de fuentes confiables, pero que no se deben revelar en toda su magnitud, aunque constituyen un fiel reflejo de la idea a transmitir sobre el fenómeno que se investiga.

La práctica de Peritajes Informáticos comenzó en Cuba en el año 1995, pero no es hasta el año 2000 que se crea oficialmente la Sección de Informática Criminalística del Laboratorio Central de Criminalística. Esta institución es la única facultada jurídicamente para practicar este tipo de peritaje, debido a la particularidad de las evidencias informáticas y de las herramientas necesarias para ejecutarlo.

Los datos estadísticos a analizar parten de informaciones públicas aportadas por esta institución.

Se tomarán para el análisis, los datos del año 2007 y 2008, donde se ejecutaron **238** Peritajes Informáticos, solicitados por diferentes órganos del MININT a partir de diversos procesos investigativos, de ellos, **98** corresponden a procesos investigativos donde las víctimas resultaron personas jurídicas (41.17%).

No obstante, existen amplias posibilidades de trabajar en la prevención de estas conductas criminales con acciones concretas en función de evitar este pronóstico, como son:

- La difusión a las empresas, organismos, dependencias, particulares y a la sociedad en general, de la información necesaria para las medidas sobre Seguridad Informática.
- La denuncia oportuna de los hechos que se detecten.
- Influir con el trabajo de prevención en los centros especializados como son las escuelas, centros de trabajo, y otros lugares.
- La preparación del Sistema de Justicia para el enfrentamiento a estas conductas ilícitas.
- Contribuir a elevar el nivel de conciencia de los decisores sobre el problema que nos ocupa.

Para la elección de los casos a investigar se tuvo en cuenta como criterio de selección que:

- Los hechos fueran instruidos por la División de Investigación Criminal y Operaciones del MININT, especialmente por las Secciones de Enfrentamiento a los Delitos Económicos y Delitos Especiales.
- Estén involucradas las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones a partir de su utilización en la ejecución del hecho o como fuente de información para el esclarecimiento del caso.
- Las víctimas de los hechos fueran personas jurídicas nacionales.
- El período de ocurrencia de los hechos fuera entre los años 2007 y 2009.
- En consecuencia fueran competencia del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana.

Sobre la base de estos criterios se determinó que la población estaba constituida por 34 Expedientes de Fase Preparatoria de los cuales se seleccionó una muestra de 14 (42.4%) causas penales a estudiar.

El acceso al resto de las causas, al realizar el corte final para el análisis estadístico de las informaciones obtenidas como parte de la aplicación de los instrumentos aplicados, estuvo limitado por los siguientes motivos:

- Causas elevadas al Tribunal Supremo Popular por motivo de Recurso de Casación.
- Expedientes en período de tramitación sin iniciar causa.
- Causas pendientes por dictar sentencia por el Presidente de la Sala Penal correspondiente.

Los casos seleccionados se encuentran en el período comprendido entre el 14 de febrero de 2007 y el 3 de febrero de 2010, comprobándose que la tramitación de los mismos requirió de un período de 4 meses como promedio para concluir las diligencias de instrucción teniendo en cuenta la complejidad de estos procesos penales, que en su gran mayoría exigen la práctica de varios tipos de peritajes con la finalidad de demostrar la comisión del hecho que se investiga y sobre todo la forma en que se involucra la tecnología, así como cualquier otro dato de interés en pos de su esclarecimiento.

En los casos seleccionados se determinaron que en 14 causas penales se imputaron 21 delitos para 1.5 como promedio:

DELITOS	Cant
Actividad Económica Ilícita	2
Apropiación Indebida	1
Estafa	1
Falsificación de Documentos Públicos	2
Falsificación de Doc. Bancarios	5
Malversación	10
TOTAL	21

La incidencia del uso indebido de las TIC en la comisión de conductas criminógenas es apreciada de dos formas diferentes:

1. Los que aprecian el uso masivo de las TIC como un factor a tener en cuenta para la utilización indebida de las tecnologías y su nivel de incidencia en el ámbito delictivo.
2. Los que por sus funciones y objeto social les corresponde enfrentar de forma directa las conductas donde se involucren las TIC.

Nivel de incidencia de las TIC en las conductas criminógenas en el contexto de las personas jurídicas en Ciudad de La Habana en el período 2007 - 2009.

- En 5 (35.7%) de las 14 causas se ocuparon tecnologías informáticas (PC, memorias, celulares, impresoras, etc.) como parte de la sustracción realizada por los implicados en sus respectivos centros de trabajo o como parte de la inversión realizada del dinero obtenido ilegalmente.
- En 5 (35.7%) de las 14 causas se solicitó Peritaje Informático.
- Las TIC estuvieron involucradas en la totalidad de las causas.

- La Falsificación de documentos a través de su confección parcial o total para la comisión del hecho (93%).
- En la alteración de sistemas automatizados para el control de la contabilidad, los medios básicos tangibles y los recursos financieros como vía para justificar su sustracción, venta o enajenación (71.4%).
- Se evidencia que estas formas de utilización de las TIC pueden estar presentes en un mismo hecho.
- Clonación de tarjetas magnéticas (14.3%), falsificadas en el exterior e introducidas con apoyo de nacionales encargados de su comercialización y extracción del dinero que las respaldan.
- Entre las TIC más utilizadas se encuentran las PC y sus periféricos (Fax, Scanners, Impresoras, etc.), con una incidencia menor de otras tecnologías como: Tarjetas de crédito habilitadas para su utilización en Cuba por la banca nacional o por sucursales extranjeras y comercialización de cuentas de Internet.

La peligrosidad social del uso de las TIC se denota a partir de:

- ✓ La afectación económica
- ✓ El prestigio de las entidades afectadas.
- ✓ El grado de impunidad de los comisores al determinarse el carácter continuado en la gran mayoría de los hechos.
- ✓ Las facilidades que proporcionan las tecnologías para el aseguramiento material y calidad de las falsificaciones.
- ✓ La falta de seguridad de los sistemas afectados que carecen de sistemas auditores para el control de la información.

Desde el punto de vista demográfico las entidades afectadas se localizan en: (el 53% de los municipios de la capital). Arroyo Naranjo, Cerro, Centro Habana, Guanabacoa, Habana del Este, Habana Vieja, Plaza y Marianao.

Factores que propician la utilización de las TIC en las conductas criminógenas en el contexto de las personas jurídicas en Ciudad de La Habana en el período 2007 – 2009.

El vertiginoso desarrollo del proceso de informatización de la sociedad, traducido en:

- ✓ La cantidad de graduados de los Joven Club.

- ✓ Nivel profesional de los graduados de la UCI, el CUJAE, la Universidad de La Habana y el Sistema Educacional de la enseñanza politécnica en el campo de la Informática.
- ✓ El nivel tecnológico, traducido en software y hardware, alcanzado en las comunicaciones, en los servicios y en los procesos económicos y financieros.
- ✓ La insuficiente labor de formación de una conciencia y cultura sobre la Seguridad Informática
- ✓ La compartimentación de la información vinculada a los procesos económicos, financieros, contables y la información oficial clasificada, que genera:
- ✓ Violaciones del Control Interno relacionado con el registro de las Tarjetas Magnéticas como documento de valor.
- ✓ Insuficiente personal informático o con la requerida calificación para el control de los procesos y auditorías de los datos.
- ✓ La transmisión manual de datos entre entidades y sus áreas de contabilidad y finanzas.
- ✓ Los administradores de la red se encargan de la operatividad y seguridad de los sistemas administrativos, violando las medidas en la compartimentación de la información.

Características de las conductas criminógenas donde inciden las TIC en el contexto de las personas jurídicas.

- a) La tramitación durante el proceso penal.
- b) Fase del juicio oral.
- c) Particularidades de los acusados procesados.
- d) Particularidades de las personas jurídicas como víctimas.
- e) La peligrosidad social.
- f) Formas de utilización de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones.

a)- La tramitación durante el proceso penal:

- ✓ En los EFP se refleja la radicación de más de un delito por cada expediente (14 EFP- 21 delitos).
- ✓ Los delitos de mayor incidencia son: Malversación (47%) y Falsificación de Documentos (33%), pero se manifiestan otras tipicidades como: Actividad Económica Ilícita, Apropiación Indevida y Estafa.
- ✓ La tramitación de la fase preparatoria al juicio oral requirió de un período de 4 meses como promedio para concluir las diligencias de instrucción.

- ✓ El Peritaje Informático es solicitado como último recurso en los casos donde no existen posibilidades de demostrar la participación de los involucrados a través de otras pruebas, debido al tiempo que requieren para su realización y la capacidad de respuesta del LCC.
- ✓ La medida cautelar de prisión provisional fue impuesta a 45 acusados, lo que responde a la cantidad de implicados en cada hecho, la afectación económica producida al Estado y el modo de ejecutar el delito.

b)- Fase del juicio oral:

- ✓ El 82% de los acusados (34) fueron sancionados a más de 4 años de privación de libertad, aunque es justo destacar que en 6 de ellos se aplicaron las sanciones de Trabajo Correccional con Internamiento y Sin Internamiento.
- ✓ Resultan insuficientes las pruebas aportadas para exigir la responsabilidad civil, sólo se impuso en 5 casos (35.7%).
- ✓ En las sanciones impuestas para los delitos de Malversación y Falsificación de Documentos, primó la aplicación de la figura básica, (3 a 8 años de privación de libertad).
- ✓ La responsabilidad penal fue exigida a los acusados, todos en concepto de autor.

c)- Particularidades de los acusados procesados:

- ✓ El promedio de acusados por causas es de 4, alto nivel de participación (54 involucrados - 14 causas).
- ✓ Todos los acusados reconocieron y confesaron los hechos.
- ✓ La mayoría de los acusados (83%) se les impuso la medida cautelar de Prisión Provisional.
- ✓ El sexo de mayor incidencia fue el masculino con el 78 %.
- ✓ El rango de edad de mayor incidencia está entre 41 y 50 años, debido al nivel de responsabilidad, confiabilidad y acceso a los recursos.
- ✓ El nivel cultural es elevado (45 con más 12 grado), se requiere para ocupar las plazas en las cuales se desempeñaban.
- ✓ La generalidad de los acusados no poseen antecedentes penales y tienen una aceptable conducta social.
- ✓ En su gran mayoría se encontraban vinculados laboralmente, aprovechando esto para cometer el hecho delictivo contra el patrimonio de la propia entidad.
- ✓ Los cargos nivel técnico (21) y los dirigentes (14), se destacan como mayoritarios, debido a las posibilidades de acceder a la información y manipularla.

d)- Particularidades de las personas jurídicas como víctimas.

- ✓ Fueron afectadas 24 entidades estatales.
- ✓ La afectación económica estuvo vinculada a las operaciones monetarias en moneda nacional y divisa.
- ✓ El área o proceso más afectado fue el financiero (100%), debido a las facultades que tenían los acusados como parte de las responsabilidades propias de su cargo.
- ✓ La afectación económica al sector estatal es considerable (más de 5 millones MN y más de 60 000 CUC).
- ✓ Otras afectaciones sufridas por las entidades se manifiestan en el aspecto moral y de prestigio, así como en lo material, con la pérdida de equipos y otros bienes.
- ✓ Las informaciones contenidas en los soportes de almacenamiento de información fueron alteradas o borradas con el objetivo de enmascarar u ocultar el delito.
- ✓ El insuficiente control del sistema económico soportado en las tecnologías como elemento esencial para la comisión de los hechos delictivos.
- ✓ No obstante el daño causado, se puede exponer como elemento positivo la identificación de los problemas de seguridad que presentan los sistemas automatizados para el control financiero y la prestación de los diversos servicios afectados, así como la importancia de la implantación y control de la Seguridad Informática.

CONCLUSIONES:

1. Se identificaron las particularidades de las conductas criminógenas donde se involucran las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en el contexto de las personas jurídicas en La Habana en el período 2007 - 2009.
2. Se realizó el diagnóstico del nivel de incidencia de las TIC en las conductas criminógenas ocurridas en el contexto de las personas jurídicas a partir de:
Tipo de tecnología y forma de utilización.

Ejecución del Peritaje Informático como medio de prueba.

La participación de los implicados en los hechos y su vínculo con las tecnologías.

Las conductas ilícitas a las que estuvieron relacionadas.

La peligrosidad social.

El nivel y tipo de afectación (económica, prestigio).

Falta de seguridad de los sistemas informáticos afectados.

3. El vertiginoso desarrollo de la infraestructura de las TIC en la provincia a partir del proceso de informatización de la Sociedad Cubana.
 4. La insuficiente labor de formación de una conciencia y cultura necesaria sobre la Seguridad Informática.
 5. La compartimentación de la información vinculada a los procesos económicos, financieros y contables, así como la información oficial clasificada, que genera violaciones del control interno contable y administrativo.
 6. Se pudo determinar las características de las conductas criminógenas donde inciden las TIC en el contexto de las personas jurídicas:
 - La tramitación durante el proceso penal.
 - Fase del juicio oral.
 - Particularidades de los acusados procesados.
 - Particularidades de las personas jurídicas como víctimas.
 - La peligrosidad social.
 - Formas de utilización de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones.
-

LA CÁMARA GESELL. SU INSTRUMENTACIÓN EN EL INTERROGATORIO DE MENORES EN LOS PROCESOS PENALES.

Autor: Arnel Medina Goite

Estudiante de 5to Año de Derecho

Las Cámaras Gesell tributan a la protección, en todos los órdenes, de los miembros más jóvenes de la sociedad. Entre sus objetivos encontramos el resguardo de los derechos fundamentales de las personas que deben ser sometidos a recurrentes indagatorios o declaraciones testimoniales durante los procesos judiciales, sobre todo los de los menores. Este valioso instrumento permite que un grupo de especialistas como jueces, fiscales, defensores y peritos, puedan observar al declarante sin ser visto. Además, mantiene un ambiente de privacidad donde se puede dialogar, preguntar y analizar, sin inhibir, ofender ni revictimizar a la persona ofendida. Por tanto, debe ser de interés estatal un análisis detallado de sus características y de la viabilidad de su aplicación con carácter obligatorio en nuestro sistema procesal penal, en los casos donde se encuentre un menor implicado bien sea como víctima o testigo. Por ello, la presente investigación realiza un análisis del surgimiento de los espacios de exploración, realiza un estudio comparado de su aplicación en varios países latinoamericanos y por último se realiza una valoración, sobre la base de nuestra legislación, para su utilización en nuestros procesos penales, analizando sus requisitos y principios. Además, se expone un estudio para su introducción al proceso y qué tipo de prueba constituiría en el acto del juicio oral.

1. La cámara Gesell. Concepto

Con esta denominación se conoce al sistema de observación que se auxilia de vidrios espejados de visión unidireccional utilizado para el estudio del comportamiento infantil, que pusiera en práctica el psiquiatra y psicólogo estadounidense Arnold Gesell, cuyo trabajo estableció las pautas de conducta seguidas en las sucesivas etapas del desarrollo infantil, el cual fue decisivo en la puericultura de las décadas de 1940 y 1950.

1.1 Funcionamiento y funciones

La Cámara “Gesell” denominada así por su creador Arnold Lucius Gesell¹, constituye un espacio específicamente diseñado y acondicionado para realizar observaciones “en vivo” de personas interactuando en situaciones reales.

Consiste en dos ambientes o habitaciones contiguas y separadas por un vidrio de visión unilateral (una para observadores y otra para observados), que permite una visión unidireccional de un salón hacia el otro, para así promover y facilitar un desarrollo más natural de la actividad observada.

La sala se encuentra dividida en dos áreas: el área para las personas observadas “Área de Trabajo” y el área para las personas observadoras “Área de Observación”.

En el Área de Trabajo se encuentra la persona sobre la cual recae la diligencia y el experto, siendo que en casos necesarios se permitirá la presencia de una tercera persona que facilite la comunicación (traductor/intérprete) y de un acompañante de confianza.

Por su parte, el Área de Observación contará con el solicitante de la diligencia y las personas que éste considere indispensables. Su comunicación estará coordinada por el solicitante y se hará llegar a través del experto ubicado en el Área de Trabajo.

¹ Arnold Lucius Gesell nació en Alma, Wisconsin, Estados Unidos, (21 de junio de 1880 – 21 de mayo de 1961) Gesell se graduó en filosofía por la universidad de Wisconsin en el año 1903. Recibió un doctorado en Filosofía por la Universidad de Clark en el año 1906. Con la intención de convertirse en médico, desarrolló estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin. Fundó una Clínica de Desarrollo Infantil y completó su doctorado en medicina en el año 1915,

Gesell hizo uso de las últimas tecnologías disponibles en sus investigaciones, utilizando los últimos avances en vídeo y fotografía. También hizo uso de espejos unidireccionales para el estudio del comportamiento infantil, desarrollando la llamada “Cámara de Gesell”, que permitía observar al menor sin la influencia del llamado efecto de reactividad.

Durante sus investigaciones, realizó estudios con muchos niños, entre los que se incluyó Kamala, un caso de niña salvaje criada por lobos en la región de Calcuta. También realizó estudios con animales jóvenes, incluyendo monos. Como psicólogo, Gesell comprendió la gran importancia de cada uno de los componentes del binomio herencia ambiente en la polémica innatismo/aprendizaje. Hizo hincapié en la importancia de no realizar atribuciones apresuradas al respecto de las causas específicas de las discapacidades mentales. Opinaba que muchos aspectos de la conducta humana, como la lateralidad y el temperamento, eran heredables.

Conviene señalar que, en los casos de su aplicación en menores, la Cámara Gesell tiene una doble función: por una parte, tiende a reducir el daño que sufre el menor por el recuerdo traumático del hecho, ya que se realiza una sola entrevista —a veces el juez ordena grabarla en video— que sirve como prueba para el resto del proceso. La entrevista es conducida por uno o varios profesionales especialistas en menores, los cuales interactuarán con él y le realizarán las preguntas. En definitiva, la idea básica es evitar la doble victimización del menor, minimizando al máximo las perturbaciones psíquicas y emocionales que el proceso le pueden acarrear al obligarlo a revivir y a referirse en forma reiterada a los hechos traumáticos que sufrió.

Por otra parte, la cámara Gesell garantiza el derecho a defensa del acusado, ya que sus peritos de parte o sus abogados (de acuerdo a lo que autorice el juez) pueden estar presentes mientras se interroga a los menores.

1.2 Aplicación

Como se mencionó el uso original de este sistema fue el psicológico, que permite el estudio de la conducta observable de las personas, sin embargo en la actualidad esta herramienta se ha diversificado y se utiliza en ámbitos como: el educacional, el sector empresarial y el jurídico.

Ámbito educacional. Varias son las instituciones educativas que cuentan con esta herramienta didáctica, con la cual es posible que un grupo de estudiantes espectadores puedan conocer y aprender sobre técnicas de entrevista, observación médica o tácticas de mercadeo por ejemplo.

Ámbito empresarial o marketing. Es mayormente utilizada en servicios de investigaciones de mercado, para grupos, que permite la documentación de sus resultados en video y audio: observación del sujeto, presentaciones de productos y servicios, así como registro de pruebas de productos.

Consiste en discusiones, charlas o puestas en común, parcialmente orientadas por un moderador que busca establecer las opiniones de un grupo de consumidores homogéneos sobre diferentes aspectos y obtener información básica de un producto, servicio, problemática social, u oferta política.

Su objetivo es sondear con profundidad la opinión del consumidor e identificar tópicos claves para luego ser validados cuantitativamente; pre testear esos productos, servicios, ideas o cualquier otro elemento que aporte a tomar buenas decisiones, antes de lanzarlas o anunciarlas a toda la población o mercado.

Ámbito judicial. En esta esfera, la cámara Gesell ha sido auxiliar mayormente en los procesos penales, en los que su utilización más reconocida es en el interrogatorio policial a sujetos sindicados o sospechosos de participar en actos delictivos. También ha tenido relevancia en las diligencias de reconocimiento de personas y actualmente en auge su uso como elemento para minimizar la victimización secundaria que sufren las personas afectadas o testigos inmersos en procesos penales.

Actualmente este recurso psicológico ha tomado auge en el plano victimológico del proceso penal, especialmente en el tratamiento de víctimas menores de edad., después de promulgarse la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en el año 1989, período en el cual se produce una transformación decisiva en las diferentes legislaciones internas de cada país,

dado que este estatuto de garantías jurídicas de la niñez repercute no solo sobre los elementos e instituciones clásicas, sino también sobre los derechos y deberes de todos los que participan en ellos.

Esta promulgación causó que muchos juristas y profesionales de diferentes disciplinas, parte o sujetos de procesos penales se interesaran en mayor escala por propiciar una mejora en el modo en que los menores víctimas o testigos son tratados por el sistema judicial.

De esa cuenta a partir del inicio del presente siglo, la herramienta Cámara Gesell se ha convertido en un instrumento novedoso y de gran apoyo para evitar la revictimización que los sistemas penales provocan en las víctimas de delitos, especialmente niños, niñas y adolescentes, que como se ha narrado obtienen también derechos que antes no se les otorgaban, como por ejemplo, la capacidad de atestiguar en juicio.

Las modificaciones introducidas en el Código Civil Español por la Ley 21/87 en el sentido de que todo menor debe ser oído por el juez, antes de ser adoptado o acogido, si tuviere suficiente juicio, y en todo caso debe consentir si es mayor de 12 años, es tal vez un avance en este sentido.

En 1957, a partir de la ley de revisión de la protección de la evidencia en niños, Israel incluye la figura legal del Interrogador Juvenil, en su sistema jurídico,

Posteriormente la República Federal Alemana en 1986 y Canadá en 1987 a través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia y de algunas disposiciones del sistema judicial canadiense, respectivamente incluyen otros métodos y técnicas durante el testimonio de menores, tales como la grabación, audio y/o video con uso simultáneo de Cámara de Gesell.

Esta última modalidad técnica, permitió la presencia pasivo observadora o activa mediatizada, en este último caso a través del Interrogador Juvenil, tanto por parte del Juez, del Fiscal, Asesor de Menores, Oficial de Investigaciones, abogado defensor y cualquier otra persona facultada por el Juez para intervenir en el acto, cuyos adecuados marcos jurídicos, lingüísticos y psicológicos quedaron así fijados².

1.2 Objetivo y ventajas prácticas

El objetivo que se persigue con la utilización de las cámaras Gesell es la no revictimización de personas menores de edad o con discapacidad que figuren como víctimas o testigos en procesos judiciales y que necesariamente deben formar parte de la implementación de políticas que tiendan a una justicia más humana.

Este instrumento permite que un grupo de especialistas como jueces, defensores y peritos entre otros, puedan observar al declarante sin ser vistos, a la vez que se mantiene un ambiente de privacidad donde se pueda dialogar, preguntar y analizar, sin inhibir, ofender y revictimizar a la persona ofendida.

² VITALE, Gabriel M. A. De los testimonios de niños y niñas, análisis y propuestas. Págs. 11 a 18. En revista penal online, <http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,55,0,0,1,0> 26-agosto-2009 18:50.

El acto por el cual los expertos escuchan los relatos de los niños damnificados, puede ser llevado a cabo con ciertas previsiones instituidas para evitar su ulterior repetición y a su vez garantizar el derecho de defensa en juicio. Así los ambientes de Cámara Gesell, deben estar dotados de tecnología que permita la grabación de las diligencias allí llevadas a cabo y su posible enlace en directo en sedes judiciales.

Las ventajas³ que se pueden establecer con el uso de esta herramienta son:

- a) La declaración se desarrolla en un ámbito de privacidad.

El ámbito de privacidad tiene que ver con el lugar donde se practica la entrevista que es un lugar adecuado y aislado de las normales estaciones de trabajo donde normalmente se reciben las denuncias.

La audiencia ya no se toma en el medio de otros empleados judiciales, detenidos, abogados y público en general, sino en la habitación especialmente acondicionada al efecto, la que en lo posible debe contar con mobiliario lo más adecuado posible a la etapa evolutiva del menor.

Cortinas, colores suaves, muebles cálidos, cuadros, todo puede contribuir para que ese espacio sea dentro de lo posible ameno y agradable, dado que resulta aconsejable que los menores que tengan que declarar lo hagan en un espacio en el que se sientan cómodos pues ello facilita la comunicación.

Aspecto importante además es el esfuerzo que se realiza para resguardar la identidad del menor, quedando totalmente excluida la posibilidad de divulgar la participación del niño en el procedimiento en cualquier medio de comunicación.

El lugar puede además estar acondicionado con juguetes y otros elementos didácticos que permitan y faciliten interactuar con los menores que tienen que pasar por esa situación, pues el juego, el dibujo y la escritura suelen ser herramientas utilizadas con frecuencia en estos casos.

El profesional de la psicología que intervenga deberá contar con los medios que considere necesarios para llevar a cabo la entrevista, entre: juegos, muñecos sexuados, elementos para la realización de gráficos y otros artículos adecuados tanto a la sala como a la edad y etapa evolutiva del menor a entrevistar.

En la sala de entrevista se procurará contar con cámaras para registrar el acto procesal y en este aspecto lo aconsejable es que no estén a la vista pues su presencia ostensible puede resultar intimidatoria para el menor.

Esto no significa que deba ocultarse su existencia a los menores sino que han de colocarse de modo tal que los declarantes no se sientan invadidos. Sería entonces conveniente decirle a los niños, niñas o adolescentes que van a ser filmados, aunque las cámaras permanezcan lo más disimuladas posible.

³ PADULA, Pablo Federico. La implementación de la cámara Gesell en la provincia de Misiones. XXV Congreso de derecho procesal. Buenos Aires, Argentina. 11, 12 y 13 de Noviembre de 2009. Pág. 5 a 11.

b) El rol de entrevistador es cumplido por un psicólogo.

La otra enorme ventaja comparativa del sistema de declaración en cámara Gesell con el mecanismo tradicional de recibir la testimonial de víctimas, tiene que ver con el rol de entrevistador que es cumplido por un psicólogo, quien a su vez será el intermediario entre el tribunal y el testigo.

La intervención de un profesional especializado en materia psicológica puede garantizar la mejor interacción posible entre el entrevistador y los menores, teniendo en consideración que el psicólogo posee especiales conocimientos que así lo pueden permitir. Sin menospreciar el valioso trabajo que los empleados judiciales han venido desarrollando al recibir el testimonio en audiencia a las víctimas o testigos de delitos y/o de violencia familiar. Lo importante es que la mecánica puede verse mejorada al integrar profesionales en psicología que conocen de técnicas de abordaje y diagnóstico que el resto ignoramos.

Esta participación se ve reforzada ya que en el ámbito específico de la relación entre los menores y el sistema judicial se hace referencia a la revictimización como un proceso generado cada vez que la víctima tiene que asistir a una institución judicial y revivir los hechos sufridos, con los daños psicológicos que implica, situación particular que justifica que la entrevista sea conducida por un profesional de la psicología.

El psicólogo procurará que la declaración se realice de la manera más espontánea y libre posible, sin el formato clásico de interrogatorio inquisitorio donde se les pregunta puntualmente sobre hechos y sucesos de alto impacto emocional. En lugar del interrogatorio propio del estilo forense tradicional, el psicólogo deberá avenir a los niños, niñas o adolescentes víctimas o testigos para que se expresen libremente sobre los hechos sucedidos y puedan exponer no sólo sobre aquello que cayó bajo sus sentidos sino también sobre sus emociones.

La presencia del psicólogo permitirá al mismo tiempo el manejo de situaciones difíciles que se plantean en el marco de estos actos procesales donde puede ocurrir y a menudo sucede, que como consecuencia de tener que recordar los episodios vividos en el pasado se desaten crisis de llanto que aconsejan una actitud de contención afectiva. Por otro lado, la intervención del psicólogo no se encuentra totalmente desarticulada de los fines del proceso sino que aquel previamente debe interiorizarse sobre los hechos que se ventilan en la causa y saber qué es materia de investigación, debiendo orientar su participación a la búsqueda de la verdad pero con un tacto y tiempo distintos teniendo en consideración que el entrevistado se trata de una persona menor de edad y por lo tanto esencial y naturalmente vulnerable.

Es por ello que además de las preguntas abiertas y no inquisitivas que haga el psicólogo, el mismo puede recibir a través de algún sistema de comunicación como puede ser la pantalla de un computador o un micrófono inalámbrico las preguntas que el tribunal, la defensa o la Fiscalía deseen realizarle, las cuales serán traducidas al lenguaje que se ha entablado entre el entrevistador y el testigo e introducidas en el momento más oportuno a criterio del profesional interviniente.

Esta participación de los representantes judiciales, fiscales y defensores es lo que permite descartar toda afectación del debido proceso legal de los imputados, ya que las partes y el Tribunal tendrán acceso a un control adecuado de la prueba con la sola limitación de la forma en que el niño será examinado.

c) Su resultado se puede registrar digitalmente.

La tercera de las ventajas antes señaladas para el uso e implementación de la herramienta cámara Gesell para incorporar los relatos de testigos menores de edad al proceso es que su resultado puede registrarse digitalmente, lo cual permite al juez, a la defensa y a la Fiscalía poder volver a escuchar y ver al testigo cuantas veces lo necesite.

El registro digital tiene también la ventaja de que permite reproducir el momento mismo de la declaración con todas las vicisitudes propias de cada instante y que no pueden ser anotadas en un acta, no por imposibilidad material, sino por lo indescriptible que pueden resultar ciertos gestos. Si en el medio del relato una niña testigo, cuando se menciona un hecho puntual o el nombre de una persona en particular, por ejemplo el abusador y esta irrumpe en llanto, o se cierra en un hermético silencio, o comienza a tener movimientos corporales que reflejan un estado de ánimo en particular, ello sólo podrá volver a ser vivenciado en las imágenes grabadas en el equipo especializado al efecto, pero nunca surgirá de un acta escrita.

Respecto al temor que puedan infundir los registros digitales en cuanto a la seguridad de su preservación, no es mayor su equivalencia con el riesgo en la pérdida de un soporte de papel que de un soporte magnético. Las resistencias son más de tipo cultural que real. Bastará entonces con hacer un par de copias de seguridad del registro respectivo y almacenarlas en un lugar y bajo condiciones determinadas para garantizar su posterior uso.

Otro beneficio del registro digital se relaciona con la posibilidad de su reproducción en la etapa de debate ante el tribunal de juicio oral donde en lugar de volver a convocar a los testigos o víctimas para que brinden testimonio de lo que ocurrió quizás años atrás, pueden reproducirse las imágenes captadas en la oportunidad en que se realizó la entrevista en cámara Gesell evitando la revictimización del menor y los riesgos de que el paso del tiempo borren o distorsionen los recuerdos y la memoria del testigo que seguramente ha hecho un enorme esfuerzo para tratar de superar aquellos hechos traumáticos que le piden que recuerde.

Lo pretendido es asegurar el derecho superior de los niños abusados y testigos del hecho amparándolos por el beneficio de la cámara Gesell como instrumento para prestar su declaración testimonial.

2. Análisis comparado de su aplicación en países latinoamericanos

Guatemala.

Hasta el año 2009 el uso de la cámara Gesell en este país se había constreñido al diligenciamiento de reconocimiento en fila de personas, sin embargo con el apoyo del programa de las Naciones Unidas, “Fondo para la infancia” UNICEF, se concretó la implementación y equipamiento de estos espacios para uso en declaraciones de menores víctimas de delitos sexuales, así entre octubre y

diciembre pasados fueron inaugurados cuatro espacios de este tipo, dos en sedes fiscales, una en la sede central del Ministerio Público ubicada en el Barrio Gerona de la ciudad capital y otra en la sede de la Fiscalía Distrital Adjunta de Villa Nueva, el 9 y 12 de octubre respectivamente.

Su utilización está amparada en el Decreto número 17-2009, que introduce las modalidades de recepción de testimonial mediante el uso de tecnología audiovisual, para dar tratamiento especial a testigos, peritos o al colaborador eficaz, que por circunstancias debidamente fundadas no pueda concurrir al tribunal a prestar declaración en forma personal, petición que podrán realizar las partes o introducirla el tribunal de oficio.

La declaración se hará mediante videoconferencia o el uso de audiovisuales de tecnología similar, que resguarden la fidelidad e integralidad de la declaración y garanticen a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos procesales.

Argentina

En Junio de 2008, se sancionó la ley que modificaría el Código Procesal Penal. A partir del cual se logró incorporar el procedimiento de la entrevista en Cámara Gesell como intervención regular en los casos que se debiera efectuar la recepción del testimonio de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual. Se trató sobre la “Implementación de la Cámara Gesell” para lo cual se modificó un artículo del Código Procesal Penal (234) y se incorporó otro Artículo (235 bis y 235 ter). Estas modificaciones especifican que los sujetos a los que comprende serán únicamente las víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Título III, Capítulo II, III, IV y V que a la fecha en que se requiera su comparecencia no hayan cumplido los dieciséis (16) años de edad.

La misma destaca la función del psicólogo ya que son estos los autorizados a llevar a cabo la conducción de la entrevista en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados para tal fin.

Por otra parte se establece que en el caso de que se tratara de víctimas de delitos contra la integridad sexual, cuya edad se encuentre entre los 16 y los 18 años, y se deba recepcionar su testimonio en sede judicial, intervendrá un psicólogo a fines de evaluar su estado psíquico y el potencial riesgo que ello pudiera representar para su salud física y psicológica.

La entrevista en Cámara Gesell apunta a establecer criterios de credibilidad y competencia a partir del relato del niño, articulando el mismo con lo comportamental y afectivo. Lo surgido de esta es vertido en un informe detallado con las conclusiones a las que arriba el profesional.

Este método se sustenta en la necesidad de privilegiar el interés superior del niño, preservar su integridad e intimidad considerando que de esta forma se evita provocar nuevos daños a los menores que resultaren víctimas de este tipo de delito; y de igual forma no afectar el derecho de defensa del/os imputados, todo según las normativas vigentes a nivel provincial y nacional.

Colombia

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la justicia colombiana cuentan con dos Cámaras de Gesell que, además de reducir el daño que sufre el niño por el recuerdo traumático del abuso, sirve

como prueba para el proceso judicial. Las mismas fueron instaladas en el “Centro de Atención Integral a Víctimas de la Violencia sexual de Bogotá” como un aporte al modelo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual.

En este sentido, el nuevo sistema penal acusatorio colombiano acepta como prueba las entrevistas realizadas a menores de edad previamente grabadas en video o audio, cuestión avalada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo 2767 del 23 de diciembre de 2004. Además, la película será la base para adelantar audiencias preliminares y otras diligencias que se requieran en los procesos administrativos.

Venezuela

Amparado en el Artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos integralmente por tribunales especializados, lo que impone al Estado la obligación de desarrollar un proceso de creación y fortalecimiento de un nuevo modelo de órganos jurisdiccionales que atienda al interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como a su particular situación como personas en desarrollo, el Tribunal Supremo de Justicia de esa nación dictó el 30 de septiembre de 2009 el Reglamento para el uso de la Cámara de Gesell de los Tribunales de Protección de niños, niñas y adolescentes, las cuales están instaladas en los Circuitos Judiciales de protección de niños, niñas y adolescentes de esa nación.

De lo antes expuesto se colige que en los sistemas procesales de los países analizados está regulado el uso de la Cámara Gesell, reconociéndosele su utilidad y aplicabilidad en el esclarecimiento de delitos y en el evitar la revictimización. Ahora bien, donde si no es unánime el tema es en la inclusión de los resultados arrojados al juicio oral, pues unos, como es el caso de Guatemala la reconocen como prueba testimonial, mientras otros, como Colombia, la admiten como prueba documental, y un tercer grupo encabezado por Argentina la admiten indistintamente, ya bien documental, mediante la presentación en el juicio del video o el acta levantada, o testifical, previo análisis del valor del testimonio prestado por el menor, que se realizará por peritos especializados.

Por tanto, está demostrada la aplicación en nuestro contexto jurídico de este método y sus ventajas, y más importante aún está demostrado que los países en su implementación no han imitado paradigmas, sino, que dado lo delicado del tema, lo han implementado atemperado a las características de cada país, dictando sus propios reglamentos para su uso, que de forma general tienen los siguientes principios:

- 1) Promover y asegurar la intimidad necesaria para facilitar la obtención más natural, libre y espontánea de las opiniones, testimonios, consentimientos, declaraciones, entre otras actuaciones, que deban expresar los niños, niñas y adolescentes.
- 2) Evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes que participan en procesos judiciales como partes, víctimas o testigos, al reducir la cantidad de veces que tienen que repetir su intervención en dichos procesos y, con ello la evocación, de recuerdos dolorosos.
- 3) Facilitar la obtención de elementos que sirven como medio de prueba para los procesos judiciales.

Así, después de analizar estos principios, pasaremos a analizar la protección que tienen en nuestro país los menores involucrados en procesos penales, ya bien como víctimas o como testigos, la

aplicación de la Cámara Gesell en nuestro país, su regulación y la forma en que se presentan sus resultados en el juicio oral.

3. Protección a los menores víctimas⁴ en el ordenamiento jurídico cubano.

Nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1991, la cual señala el derecho del niño que está en condiciones de formarse un juicio propio de expresar libremente su opinión en asuntos que lo afecten, y la obligación de tener en cuenta sus opiniones en función de su madurez o su edad, así como la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, de acuerdo con el procedimiento establecido en las leyes nacionales.

Por otra parte es clara en su Artículo 16 en cuanto a que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques."

Se les reconoce también en ella a los niños y niñas en el Artículo 19 apartado 2do, el derecho a la necesaria protección que deben recibir contra toda forma de abuso físico, mental, maltrato o abuso sexual, entre otros, en tanto obliga a los Estados a establecer procedimientos eficaces para la investigación y tratamiento a estos casos, comprendiendo la intervención judicial según corresponda, reafirmado en su Artículo 39, donde se aborda con especificidad la obligación de los Estados de proteger al niño contra toda forma de explotación o abuso sexual.

Además de la preocupación por el tratamiento al niño durante el proceso, la Convención se pronunció también por la necesidad de promover la recuperación física y psicológica de todo niño víctima de cualquier forma de explotación o abuso y de su reintegración a la sociedad.

Con independencia de la ratificación en esa fecha, ya desde mucho antes venía desplegando un serio trabajo en función de la protección de la infancia y de garantizar el desarrollo armónico y feliz de su personalidad. En 1975 se promulgó la Ley 1289 "Código de Familia", que consagra la enorme importancia de la familia en la formación de las nuevas generaciones.

La Constitución de la República de Cuba de 1976 en su Artículo 40 establece que la niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad y que la familia, la

⁴ En 1985 la Organización de Naciones Unidas, adoptó los "Principios Básicos de Justicia para las Víctimas", definiendo como tales a las personas que individual y colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, estableciendo que estas deben ser tratadas con compasión y respeto de su dignidad, proporcionándole una pronta reparación del daño sufrido de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional .

escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a su formación integral.

Serían innumerables las medidas y programas concebidos por nuestro Estado revolucionario para instrumentar jurídicamente este postulado constitucional, baste decir la promulgación en 1978 del Código de la Niñez y la Juventud, que refrendó la voluntad del legislador de proteger a estos sujetos ingenuos e inmaduros en su formación y desarrollo físico y psicológico. Este texto legal declaraba el esfuerzo del Estado Cubano por la conjugación adecuada y armónica de los intereses sociales e individuales en la formación integral y multifacético de los niños, antecedente genuino del principio del Interés Superior del Niño, ya abordado, haciéndose eco del sentido profundamente humanista y noble de nuestro proceso revolucionario y de su indiscutible líder quien ha reiterado en incontables tribunas que “nada hay más importante que un niño” en plena convergencia con el ideario de Martí, cuando expresó: “Los niños son la esperanza del mundo”.

Especial preocupación ha existido también en nuestro país por la protección jurídica-penal al menor como víctima de actos sexuales corruptores o deshonestos, desde el Código Penal Español de 1870, pasando por el Código de Defensa Social hasta la Ley 1279 de 1973 del poder revolucionario y que mantuvo la Ley No. 21 de 1979 y la Ley No. 62 de 1988 (Códigos Penales).

La preocupación por la especial protección de los menores se vio reflejada también en la Ley No. 7/77 de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en la que en su Artículo 48 se designó al Ministerio Público, para representar y defender los intereses de los menores hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de su persona, bienes, o derechos, en cualquier tipo de proceso cuando no tengan representante legal o tengan intereses contrapuestos con éstos.

Para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público, un poco más reciente fue promulgada la Ley No. 83 de 1997, de la Fiscalía General de la República y su Reglamento, instrumentos que guían y uniforman las acciones del Fiscal en todo el territorio nacional. En esta ley se otorga especial relevancia a la actuación del Fiscal en la protección de los derechos del menor, especialmente de los que se encuentran en desventaja social, y le otorga la facultad de representar y defender a los que carezcan de representante legal o cuando los intereses de este sean contrapuestos con los del menor y examinar todo tipo de documentación relativa a su situación, así como efectuar entrevistas a éstos, a los maestros, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, juristas y otros funcionarios encargados de su educación y reorientación.

Dada la índole del presente trabajo a continuación se hace referencia específicamente a las normas de procedimiento que garantizan la necesaria protección de los menores que hayan sido objeto de maltrato físico, mental o sexual.

3.1 Regulaciones en el ordenamiento jurídico- procesal cubano sobre los derechos y garantías del niño víctima. Especial referencia a la Exploración del Menor.

El artículo 109 de la Ley de Procedimiento Penal establece las funciones reservadas al Fiscal como garante de la Legalidad en el proceso penal, y además de encargarlo de supervisar el cumplimiento de

las leyes en la ejecución de las acciones, diligencias y trámites y de velar por el respeto a las garantías procesales del acusado, lo responsabiliza con velar también "... por la protección de los derechos de la víctima o perjudicado del delito y por los intereses del Estado y la Sociedad."

Para instrumentar este postulado en la práctica, la Fiscalía General de la República ha emitido diferentes Instrucciones, la más actual, la No. 7/99, que establece que el Fiscal durante la tramitación de la fase preparatoria participará personalmente en las diligencias de instrucción que tengan especial relevancia con el fin de influir en la calidad de las acciones que se realicen. Dentro de estas diligencias se incluyen por supuesto aquellas que involucran a menores de edad toda vez que nuestro procedimiento penal en consonancia con lo postulado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ofrece la posibilidad de que los menores de 16 años de edad sean escuchados en todo proceso penal que se siga en virtud de algún acto delictivo contra su persona, ello aunque no es una declaración expresa en los textos legales analizados, si se desprende en primer lugar al analizar las exenciones para declarar como testigos en el proceso penal recogidas en el Artículo 168 de la Ley Procesal, donde no se incluye al menor de edad, ni se distingue a sus representantes legales entre las personas que pueden excusarse de la obligación de declarar por determinadas causas, entre las cuales pudiera figurar la afectación psicológica del menor.

La participación del menor en el proceso viene recogida en el Artículo 179 de la Ley de Procedimiento Penal, el que enuncia (aunque muy poco explicativo) que el examen de los menores de 16 años "...se hará por vía de exploración y no se le harán las advertencias legales", que se refiere a los apercibimientos sobre la obligación de decir la verdad, que si están previstas para los testigo mayores de dieciséis años de edad, precepto por demás limitado que expresamente no consigna cómo, ni por quien se hará la exploración, ni distingue cuando se puede o debe prescindir del llamamiento al menor en un proceso penal, para unificar criterios de los que en él intervienen.

Si bien de lo anterior se entiende que nuestra Ley Procesal acepta la presencia del menor de edad como testigo en el proceso penal, esto no significa que irremediable y obligadamente deba hacerlo, pues preceptivamente recoge al distinguir los supuestos en los que no será necesario recibir declaraciones como testigos, en su Artículo 171, apartado tercero a aquellos cuyos testimonios "No resulten esenciales a los efectos del esclarecimiento del hecho".

De este modo en la práctica queda a juicio de la autoridad actuante, determinar si prescinde de la presencia del menor en correspondencia con la relevancia de su testimonio y las condiciones en las que este se encuentre, pues de esto tampoco ofrece alguna referencia la Ley Procesal, por lo que en este sentido también podría señalarse que al intervenir diferentes autoridades en las distintas fases del proceso penal, lo que para una resultó obvio, puede no serlo para la otra, de manera que puede suceder que el instructor policial al imponerse de los detalles del hecho que investiga prescinda de explorar al menor víctima y sin embargo esto no le baste al Fiscal, o al Tribunal, en su momento, que pueden considerar incompleto el expediente y no coincidir con las razones argumentadas por el instructor, lo que en el mejor de los casos puede resultar en la dilación del proceso, si no en hacer concurrir al menor a prestar testimonio cuando ya haya pasado cierto tiempo del suceso.

Antes de proseguir, este análisis merece detenerse primeramente en lo que significa o entraña la exploración del menor. En el concepto gramatical, explorar significa "reconocer, inquirir o averiguar con diligencia una cosa", inquirir es "indagar, averiguar o examinar cuidadosamente una cosa", y examinar es "investigar, inquirir, escudriñar", (Espasa- Calpe /1945.P. 99), entonces no cabe dudas que la exploración debe procurar primero reconocer al sujeto con el que se pretende investigar algo y luego hacerlo con la mayor diligencia y cuidado posible, para que ello lleve a la verdad inquirida.

Para decidir si se explora a un niño debe conocerse ante todo su edad, lo que permitirá valorar la posibilidad real de obtener un testimonio objetivo, pues aunque no existe ningún límite para conocer cuando puede o no guardar lo sucedido en el recuerdo, si la mayoría de los autores coinciden en que los menores de tres años no son factibles de ser sometidos a un proceso pues no registran con exactitud en su memoria los sucesos, lo que como es lógico no resulta absoluto. De igual forma no resulta lo mismo explorar un escolar que a quien no lo es, por el grado de independencia que desarrollan los primeros, ni a uno de seis años que a uno de ocho, edad en la que es más elaborado el pensamiento, ni a un niño, que a un adolescente, que puede enmascarar intereses en su testimonio, sobre todo lo relacionado con su intimidad.

En segundo lugar debe conocerse el tiempo transcurrido desde el suceso que se pretende esclarecer, pues la distancia en el tiempo, puede llevar a distorsionar o borrar parte de sus recuerdos.

Al explorar un niño cualquiera que sea su edad se debe buscar la manera de llegar a conocer lo que se desea sin que su sagacidad le permita percatarse que es ese el objetivo de quien lo explora, para ello nunca debe abordarse directamente el tema, se debe crear un ambiente que le inspire confianza y ello requiere paciencia, conocimiento elemental de los gustos y motivaciones infantiles, lo que hará que el intercambio resulte ameno y poco a poco vayan disipándose dudas temores y reticencias que bloquean la comunicación. Se le debe dar la posibilidad de que hable y con maniobras girar la conversación hacia donde interese al explorador, sobre todo con preguntas generales que le permitan realizar una exposición y se le debe escuchar con atención, sin interrumpir su relato, pues ello puede conducir al silencio. Es necesario despojarse de toda la carga subjetiva adquirida de las demás pruebas, hasta que se obtenga ésta, evitar preguntas cerradas que no den al niño otra opción que no sea el sí o el no, pues se sentirá obligado por una de ellas, que no siempre se ajustará a la verdad.

Para realizar la exploración el que estará a cargo de la diligencia debe tener pleno dominio de los pormenores del suceso sobre el que procura información, tanto o más que quien será explorado, lo que le permitirá identificar y aprovechar los acercamientos del niño al tema o a un detalle que le abra el camino para entrar. Debe haberse informado de las características del niño, nivel de aprendizaje, temperamento, preferencias.

En el acto de juicio oral el interrogatorio o exploración del menor de edad debe estar libre de todo formalismo y a decir del profesor Danilo Rivero efectuado en términos simples y concretos que puedan ser comprendidos fácilmente por el menor.

Dicho acto regido por las normas de la costumbre, la ética y la experiencia práctica hasta hace unos años en la actualidad se encuentra regulado por la Instrucción No. 173/2003 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular que salvando la escasa previsión de nuestra ley procesal instrumentó a

través de ella los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y precisó el proceder de los Tribunales, estableciendo una política uniforme a seguir por los distintos órganos de justicia del país.

Esta Instrucción no se limitó a normar cómo debe realizarse la exploración judicial de un menor, sino que ofrece instrucciones sobre los presupuestos que deben estar presentes en un Expediente de Fase Preparatoria, donde la víctima haya sido un menor para admitir su apertura a juicio oral reservando la posibilidad de efectuar el examen de los menores solo cuando ello resulte imprescindible porque su testimonio sea determinante para el esclarecimiento del hecho, anteponiendo los intereses del menor (no afectación a la salud mental) a los de alcanzar los fines de la justicia, sin restarle importancia a esta función de los órganos jurisdiccionales, pero sin victimizar al menor.

Instruye entre otras exigencias la opinión de un especialista en el Expediente, que se pronuncie por la factibilidad de someterlo o no a tal proceder, así como la fundamentación de las partes en el proceso sobre este extremo, y que puede llevar al Tribunal a prescindir de su examen. Tal regulación obliga a las partes a detenerse especialmente a evaluar la situación concreta de cada menor antes de proponer su examen al Tribunal, eliminando así el riesgo convertido en práctica de llevarlo siempre ante los jueces, muchas veces, cuando su testimonio no aporta nada esclarecedor al proceso.

Resulta muy alentador el pronunciamiento emanado de nuestro superior órgano judicial, que equilibra el interés superior del niño, con los fines de la justicia, en tal sentido resulta prolija en instrucciones a los Tribunales de cómo proceder ante cada situación que puede presentarse en la rica realidad cotidiana, para no sacrificar uno ni otro interés, reservando a los jueces la facultad de decidir si hace concurrir a un especialista que los auxilie en la formulación de las preguntas.

Incorpora a la vez una serie de opciones para fijar la entrevista del menor de modo que pueda resultarle útil a los jueces en su momento y la opción de hacerlo, en el Tribunal, pero fuera de la Sala, sin formalismo alguno, con la prescripción de que deben procurar crear un ambiente propicio, de acuerdo con la edad, con lenguaje claro, sencillo, apropiado, acercándose a sus preferencias (juegos, escuela, amigos) inspirando confianza para tratar de que asuma lo ocurrido con naturalidad.

Por primera vez se plantea una edad límite para ofrecer tratamiento diferenciado a los menores de edad, en este caso los doce años, período en el cual inicia la adolescencia, y el camino del niño hacia su madurez, se cambia de enseñanza primaria a secundaria y el adolescente tiene otro nivel de conocimiento de los fenómenos que ocurren en su entorno.

Los asuntos donde estén involucrados menores de dieciséis años de edad deben ser priorizados por encima de los que no, imprimírsele celeridad y escoger el personal que habrá de tratar con ellos, prefiriendo los de mayor experiencia y preparación en la actividad.

En el Segundo Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, celebrado en Camagüey fue presentado un trabajo sobre "La Prueba en el Proceso Penal", en el cual se abordó la forma en que debe realizarse la exploración de un menor, planteándose como principios a seguir en el

desarrollo de la entrevista infantil para inspirar la confianza del menor y evitar el fracaso en el interrogatorio, los siguientes:

- Brindarle al niño un clima de aceptación, confianza y seguridad (indagar sus actividades en la escuela, amigos y cualquier otro aspecto de interés).
- Tener en cuenta que los niños tienen un mundo cargado de fantasía, por tanto la confianza en su dicho es relativa.
- Formular durante la entrevista preguntas cercanas a su mundo interno.
- Prestar especial atención al uso de conceptos abstractos por parte del niño durante la entrevista que puedan ser el resultado de un proceso memorístico influenciado por un adulto.
- No formular preguntas que amenacen su propio código interno de lealtad a los padres u otros adultos dentro de su radio de influencia o amigos.
- Formular también preguntas colaterales, para conocer y valorar el alcance y la lógica de sus análisis, para saber luego en su justa medida qué damos por probado de su dicho.
- Evitar preguntas cerradas, donde el niño pueda refugiarse con respuestas que brinden poca información.

Comoquiera que las legislaciones deben ser instrumentos para definir e implementar un sistema de garantías que articule de manera coherente y operativa las políticas, planes y programas de acuerdo a las concepciones sociales y culturales de cada nación, a tono con la preocupación de los juristas en nuestro país por la protección de los infantes, debe ir la preocupación y ocupación de los órganos legislativos e instituciones involucradas por el tratamiento concebido en las leyes y el ofrecido en la práctica a los menores cuando estos resulten víctimas.

3.2 ¿Exploración del menor en Cámara Gesell hoy en nuestro país?

Realicemos la lectura de algunos apartados de la Instrucción no. 173 de nuestro Tribunal Supremo Popular,

PRIMERO: Cuando un tribunal de cualquier instancia, reciba un expediente para ventilarlo en juicio oral, en el cual aparezca como víctima un menor, decidirá si su testimonio exploratorio en el juicio es imprescindible o no, para lo cual se guiará por los criterios siguientes:

Si es suficiente -a los efectos de probar el delito- la entrevista filmada que se le hizo al menor con anterioridad, particularmente para los menores de 12 años de edad;

SEGUNDO: De acuerdo con su evaluación el tribunal decidirá:

Presentar solo la filmación de la entrevista realizada durante la fase preparatoria al menor, si la hubiera, o darle lectura al testimonio de éste brindado en la fase preparatoria, especialmente de aquellos niños menores de 12 años.

Disponer la exploración a través de un especialista que en el local creado para ello en la Unidad de Protección al Menor, formulará las preguntas que le traslade el Presidente de la Sala a solicitud de las

partes o de oficio, y el testimonio que brinde el menor será visto desde la Sala a través del circuito cerrado, o video conferencia, en comunicación directa con el entrevistador, u otros medios técnicos. De lo antes expuesto se pueden sacar diversas conclusiones:

Primero: Dicha instrucción se pronuncia por la participación del menor víctima en el juicio sólo si es imprescindible atendiendo al: "interés superior del menor".

Segundo: Reconoce que la exploración debe ser realizada por especialistas, en lugar creado al efecto, el cual formulará las preguntas que se la trasladen por las partes o por el juez, hecho que quedará recogido en soporte digital.

Tercero: No reconoce este procedimiento como exclusivo y obligatorio, sino facultativo del juez, permitiéndole incluso, si lo estima pertinente, traer al menor al juicio, aunque en casos excepcionales.

Cuarto: Dicha instrucción es para sede judicial, y el actual centro fue creado con posterioridad a la aprobación de esta.

En la práctica, en nuestro país no existe la Cámara Gesell, la exploración se realiza en los Centros de Exploración a Menores, la cual se realiza comúnmente antes de pasada una semana del hecho delictivo. Ahora bien, que trae esto consigo, la presencia del juez no es obligatoria en la misma así como la del abogado, y el fiscal cuando exista conflicto de intereses se persona para proteger los intereses del menor, los que ejecutan la exploración (psicólogos, defectólogos, sociólogos, etc.) los que le formulan las preguntas pertinentes al menor.

Este acto queda filmado y además levantado en acta, las cuales sirven, y se utilizan comúnmente como prueba documental en el proceso.

A este video y acta puede tener acceso la defensa en su momento, haciendo suya esta prueba, y apoyarse en ella para sustentar o apoyar su alegato.

Los especialistas participantes, normalmente van como peritos no profesionales al acto del juicio oral, donde si son cuestionados por ambas partes y el juez, sobre el acto de exploración.

Otra cuestión sería el Acto de Validación de Testimonio, el cual se realiza con posterioridad, pero que no es concluyente, recuérdese el criterio que seguimos de libre valoración de la prueba. Este acto tampoco es obligatorio, y comúnmente, si se lleva a cabo una buena exploración, no se realiza este.

Por tanto, no puede hablarse en nuestro país hoy de la existencia de la Cámara Gesell, este procedimiento de exploración presenta matices diferenciadores muy marcados con respecto a los analizados sobre la Cámara Gesell

3.3 ¿Sería una prueba anticipada?

La Prueba anticipada es la que tiene lugar fuera o antes de la fase de debate del juicio oral, pues la misma puede llevarse a cabo durante la etapa inicial del proceso o una vez avanzado éste, es decir, en los trámites previos a la pública confrontación de las partes o fase intermedia (según se reconozca o

no la autonomía de este momento procesal). Para cumplir esta cualidad se plantea que debe reunir los siguientes requisitos⁵:

- a) La previsibilidad de su irrepetibilidad en el acto del juicio oral (requisito material, según el Artículo 342 de nuestra LPP.).
- b) Su introducción en el juicio oral por medio de la lectura de las diligencias que obren en la causa (requisito formal, conforme al precepto antes citado).
- c) La intervención del Juez Instructor o de aquel que deba decidir sobre las medidas restrictivas de los derechos de quienes intervienen en el proceso, según sea el sistema legal adoptado (requisito subjetivo).
- d) La participación del Abogado Defensor (nombrado o de oficio) y del Fiscal para garantizar la confrontación o principio de contradicción (requisito objetivo).

Dejando por sentado que en la actualidad en nuestro proceso no existe la figura del juez instructor, en nuestro caso quedaría salvado este principio con la actuación del fiscal, que es el que hoy decide sobre las medidas cautelares, y del juez, que es el que en un final aplicará las medidas restrictivas de los derechos de quienes intervienen en el proceso.

Del análisis de lo anterior, y de nuestra legislación, vemos que no están taxativamente enumeradas las causales por las cuales se puede realizar una prueba anticipada, dejándose a la libre valoración del juez, por lo cual nada impide que el evitar la doble victimización del menor, y realizar la exploración de éste en la Cámara Gesell, en un período de tiempo prudencial (ni tan cerca al hecho, que todavía está bajo sus efectos psicológicos inmediatos, ni tan alejado que permita una desvirtualización de la realidad por parte del menor) sea considerado causa suficiente, y por otro lado, de lo expuesto anteriormente sobre las características del proceso, se cumplen todos los principios enumerados.

Lo más cuestionado de este proceder, a nivel internacional, es la violación al derecho de defensa del imputado, sin embargo el uso de esta herramienta presupone de manera ideal su diligenciamiento como prueba anticipada, dando por necesario el principio de intermediación procesal que establece la presencia del juez y de las partes así como de los defensores para que pueda ser validada esta actuación. Por lo tanto no puede considerarse que se viole el derecho de defensa si es notificada con antelación e indicación del día, lugar y motivo de la audiencia a llevarse a cabo. Y de garantizarse los medios para controvertir los actos que se han de realizar. Mucho menos como está regulada hoy día en los países que la aplican, donde es obligatoria la presencia de la defensa, y, salvando además el principio de contradicción, se le permite formularle al menor las preguntas que crea conveniente, siempre y cuando el juez las acepte.

No obstante las críticas o análisis que se puedan exponer sobre el tema de acogerla como prueba anticipada, creemos que sería lo más beneficioso sobre todo para el menor, recordando que lo que estamos buscando en todo momento es la protección de su interés superior.

⁵ Seguimos y concordamos con nuestra Legislación la sentencia nro. 303 de 1993 del Tribunal Constitucional español, por las huellas que dejó en nuestro sistema procesal la LECrim. Citada por Borralló Iniesta, citado al final, P.35.

Bien es cierto que para ello debemos contar con psicólogos de alto nivel, ya que además de su acostumbrada labor, realizarán las preguntas al menor que le formule el juez, las cuales podrán ser variadas en los términos para lograr un mejor entendimiento del menor, pero no en el sentido, lo cual si daría pie a la impugnación del acto.

Requeriría también de locales dotados de un alto nivel de tecnología y condiciones, pero podría ser uno por provincia, lo cual haría menor la inversión, por lo menos como comienzo. Además se podría regular que el psicólogo sea, luego del acto, confrontado por las partes, para así estas tener su opinión sobre cuestiones que solo él, en su posición tuvo posibilidad de percibir.

3.4 ¿Qué medio de prueba sería?

Para Francisco Carnelutti, las fuentes de Prueba “son los elementos de la realidad, que existen con independencia del proceso y son anteriores al mismo”, mientras los medios de prueba designan a la “actividad procesal que es preciso desplegar para incorporar la fuente al proceso”. Como el mismo caracteriza, el primero es un concepto metajurídico, existe antes de iniciarse el proceso, (así la percepción y conocimiento de una persona sobre un suceso delictivo), y el segundo es estrictamente jurídico-procesal, pues únicamente puede concebirse una vez iniciado este.

En este caso, dadas las características de la Cámara Gesell, pueden llevarse al proceso sus resultados mediante tres medios de pruebas reconocidos por nuestra ley de procedimiento penal, el testifical, el pericial y el documental. Analizaremos cada uno por separado.

Testifical

Por testimonio se define “la declaración que hace un testigo en juicio”, lo que nos remite a la definición de testigo, siendo esta: “Quién ve, oye o percibe algo en que no es parte, y que puede reproducir de palabra o por escrito, o por signos.”⁶

En el medio testimonial es órgano de la prueba el testigo. Para Jauchen⁷ es testigo “la persona que por medio de sus sentidos ha percibido una cosa o suceso determinado”.

El testigo únicamente puede transmitir en el testimonio los sucesos que le constan por presenciar de manera directa los hechos objeto del proceso.

La narración que haga “debe estar dirigida a probar un hecho, circunstancia o cosa concreta. Y pueden referirse tanto a probar el hecho delictivo objeto del proceso, un hecho que represente un indicio de aquél, a corroborar la idoneidad probatoria de algún otro testimonio o medio de prueba. ”.

De lo antes expuesto se presume que la víctima también es testigo ya que presenció de manera directa los hechos objeto del proceso, pudiendo declarar como tal.

⁶ Cabanellas De Torres, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Nueva edición, actualizada y aumentada por Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Editorial Heliasta. Colombia, 2000. Pág. 383

⁷ «El Testigo en el Proceso Penal: Incapacidad e Incompatibilidad» en la Revista de Estudios Procesales No.37, Publicación Oficial del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Año 1987, pág. 47.

En la recepción del testimonio del niño, mediante la Cámara Gesell sea víctima o sea testigo presencial, se siguen las reglas comunes de la recepción de la prueba testimonial. Rige el principio de inmediación y de la dirección del Tribunal en la producción de la prueba. El juez ha de ser quien de manera inmediata la dirija, el Ministerio Público y el Defensor pueden formular repreguntas y solicitar las rectificaciones y exactitud de lo declarado, bajo el control del Juez quien puede oponerse a la contestación de las que estime inadmisibles. Sobre su registro, se facilita, al ser grabada la declaración y además registrada en acta.

Por tanto, puede y debe considerarse como prueba testifical la realizada por el menor mediante la exploración en la Cámara Gesell.

Pericial

En caso de que se requieran conocimientos especiales para examinar personas, hechos u objetos deberá recurrirse a un perito, esto porque el juez en ocasiones debe analizar ciertos hechos, documentos o circunstancias que escapan a su conocimiento, requiriéndose el auxilio de ciertos expertos en alguna ciencia, arte u oficio.

La intervención del perito se origina por solicitud de las partes o bien a instancia del propio Tribunal, quién para fundamentar su resolución y en caso de que no haya sido propuesta por las partes o habiendo sido propuesta una diligencia pericial no haya dejado en claro la aportación que merece sobre la reconstrucción histórica o aproximación más fidedigna a los hechos objeto del proceso al juez o tribunal para su total entendimiento por ser como se mencionó cuestiones técnicas que no forman parte del cúmulo de conocimientos del Derecho.

En el caso concreto de la Cámara Gesell, es conocida la participación del psicólogo, la cual está llamada por sus conocimientos especiales en la materia, pero es necesario aclarar que en ese caso no está actuando como perito, El psicólogo formula preguntas al niño siguiendo los puntos que el Juez, el Fiscal y el Defensor le van transmitiendo. No actúa aquí como perito sino como auxiliar del Juez y de las partes en la recepción del testimonio. Esta actuación guarda cierto parecido con la del intérprete, como lo destacara Altavilla⁸.

Por tanto, no debe considerarse como prueba pericial, a nuestro criterio prueba pericial sería en el caso de que sea llevado el psicólogo al tribunal, ya si en función de perito, para aclarar cuestiones técnicas, por ejemplo, sobre su valoración acerca de la fiabilidad o no del testimonio del menor. No obstante, somos del criterio que esas cuestiones y las que puedan requerir su auxilio pueden ser resueltas en el acto, o aclaradas en el momento que anteriormente se expresó, se dedica para que las partes lo interpielen.

Documental

⁸ Altavilla, 1970, v. II, págs.1225-1226.

Conforme a la doctrina jurídica tradicional⁹ se ha entendido que “documento, en sentido etimológico, es una cosa que lleva en sí la virtud de hacer conocer; esta virtud se debe a su contenido representativo; por eso, documento es una cosa que sirve para representar otra. Por otra parte, siendo la representación siempre obra del hombre, el documento, más que una cosa, es un opus (resultado de un trabajo)” Los diversos significados atribuidos a la noción documental van desde acepciones genéricas y omnicomprensivas de diversas realidades, hasta otras mucho más específicas, vinculadas a aspectos determinados de la realidad jurídica.

En el ámbito jurídico, dentro de los exponentes clásicos de la noción amplia de documento encontramos a Carnelutti, quien entiende por documento; “una cosa representativa, o sea capaz de representar un hecho”, o como explica el autor citado, representación es la imagen de la realidad, la que se presenta al intelecto a través de los sentidos; y, en consecuencia, documento es una cosa que sirve para representar a otra. Continúa señalando Carnelutti, que la representación de un hecho, y no la manifestación del pensamiento es la nota esencial al concepto de documento.

Quizás la noción más amplia de documento, situados ya dentro del ámbito jurídico, es aquella que entiende por tal; “aquellos objetos que tengan una función probatoria con la sola limitación de que dichos objetos sean, por su índole, susceptibles de ser llevados ante la presencia judicial”.¹⁰

De las concepciones del documento anteriormente expuestas se derivan básicamente dos teorías que han intentado explicar la realidad documental jurídica, éstas han sido: la teoría del escrito, para la cual el documento siempre es un escrito y la teoría de la representación, para la cual el documento no es sólo un escrito sino todo objeto representativo o que pueda informar sobre un hecho o sobre otro objeto. Hoy poco a poco estamos logrando que quienes sostenían la acepción amplia del concepto - teoría de la representación-, admitan al documento electrónico dentro de la categoría documental, mientras quienes abogaban por la 'teoría del escrito', siguen intentando excluir, como lógica consecuencia de la concepción doctrinal sostenida, el documento electrónico de la categoría documental, al entender ésta exclusivamente como el escrito contenido en soporte papel.

De aquí que nos afiliemos a la teoría de la representación, y aceptemos la presentación, como prueba documental, tanto el acta levantada en el acto de exploración del menor en la Cámara Gesell, como las video-grabaciones del mismo.

Los beneficios son innegables, se trae al proceso el acto, con todos sus particulares, pudiéndose repetir en varias ocasiones puntos trascendentales del mismo.

Es de destacar que se debe regular un procedimiento que obligue a realizar copias del documento electrónico y cree un mecanismo efectivo para su resguardo hasta el día del juicio, para evitar su destrucción o modificación.

⁹ Carnelutti, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. T. II. Trad. de Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Uteha , 1944, P. 414

¹⁰ Citado por el Dr. Pinochet Olave en su obra El Documento Electrónico y la Prueba Literal

Por tanto, no hay dudas de que la Cámara Gesell nos brinda dos pruebas documentales de irrefutable valor para presentar en el juicio oral el acta de la sesión y la filmación.

A modo de conclusión podríamos expresar que nos encontramos ante una situación bastante compleja, ya que pudiésemos aceptar en el proceso todos los medios de prueba que nos brinda la Cámara Gesell, pues es sabido que sobre un mismo objeto de prueba pueden recaer diversos medios, o, por otro lado, considerar el uso de esta herramienta como un medio de prueba híbrido, sin embargo no prohibido por el proceso penal ya que este se encuentra sujeto al principio de libertad de la prueba, que establece la necesidad de probar en razón de la necesidad de alcanzar la verdad histórica, para lo cual es menester eludir cualquier obstáculo que pueda imposibilitar conocerla, de manera que todo se puede probar y por cualquier medio, sólo observando las limitaciones que por varios motivos tienden a garantizar la celeridad del proceso, eficacia de la prueba y el derecho de las partes.

A nuestro criterio, debería incorporarse en nuestra legislación como un medio de prueba autónomo, dada su utilidad y pertinencia ya demostradas.

4. Viabilidad y utilidad de su regulación

En el proceso penal cubano se ha utilizado en reiteradas ocasiones la exploración realizada a los menores, en los centros habilitados para ello (ejemplo: Centro Nacional de Víctimas por Abusos Sexuales) como prueba documental en los procesos penales.

Como ejemplo de ello, traemos al análisis la Sentencia No. 464/08 del Tribunal Provincial de La Habana, en la cual, en su segundo resultado, párrafo décimo consigna que el Tribunal tuvo a la vista la filmación realizada a uno de los menores vinculados al caso tomando las declaraciones realizadas por el menor como su testimonio.

Sobre el citado proceso que dio lugar a este fallo, fue útil la utilización de la exploración en él, pero hubo sus deficiencias, pues se presentó el video de la exploración, pero como prueba testifical, hecho que creemos sea error en la redacción de la sentencia, puesto que se realizó la exploración con anterioridad al acto del juicio oral, sin cumplir con los requisitos de la prueba anticipada, además, es como documental que se incorporan estos medios de prueba al proceso en la práctica cubana.

Ahora bien, a nuestro criterio, este proceder podría ser apoyado con la introducción de la Cámara Gesell en Cuba, pues dotaría de otra herramienta al juzgador, para valorar y dictar su fallo, más conociendo que el testimonio del menor es determinante en un gran número de casos.

Cuál es nuestra propuesta, pues bien, la Cámara Gesell puede coexistir con la exploración del menor, y a juicio del instructor se llevará a cabo uno de los dos procedimientos, no ambos, pues recordar que aquí lo que se busca es la no revictimización del menor.

Esto no conllevaría modificación alguna de nuestras leyes procesales, solamente realizar, como tienen países como Venezuela y Costa Rica, un reglamento para su utilización.

En el caso en que no se realizare en fase preparatoria, puede realizarse en el propio acto del juicio oral, ubicando al menor en un local aislado con el psicólogo y realizándole las preguntas por medio de videoconferencias.

Cuál sería la utilidad de dicho proceder, pues en primer lugar, su consideración de prueba anticipada, segundo, que el juez escogería entre este y la exploración, recordando que la Cámara Gesell es una exploración que tiene requisitos extras, que por su cumplimiento la convierten en una prueba anticipada, tercero, que estaría regulado el procedimiento, no así el de la exploración, ya que los centros donde se realizan no cuentan con dicha reglamentación, lo cual perjudica a nuestro modo de ver dicho proceder, y en último lugar la ventaja más importante, el evitar la revictimización del menor, ya que de aplicarse, no se llevaría al menor al acto del juicio oral, por su carácter de prueba anticipada, lo cual puede suceder en el caso de la exploración, donde el juez puede llevar al menor a comparecer.

Por tanto son innegables las ventajas de la aplicación de éste método en nuestro país, y no sería difícil, materialmente hablando, los CEAOM tienen condiciones para su ubicación, incluso los centros donde se realizan hoy las exploraciones cuentan con ellos, sería solamente modificar un procedimiento existente a fin de crear otro que lo complemente y que tiene ventajas innegables.

CONCLUSIONES

Luego de los análisis y estudios realizados en la presente investigación podemos concluir que:

- La cámara Gesell es un ambiente adecuado para la observación de personas sin que éstas se sientan incómodas por tal actividad. Ayuda a disminuir el efecto de reactividad o predisposición del sujeto de reaccionar de una manera distinta a como lo haría si no existiere la intrusión de agentes externos que alteraran su normal desenvolvimiento. Es una herramienta de gran utilidad para la evaluación de víctimas, máxime en delitos sexuales, pues permite resguardar su pudor e intimidad.
- El uso de la cámara Gesell dentro del proceso y procedimiento penal es un avance en el reconocimiento de la víctima como sujeto titular de la protección del Estado, especialmente en el caso de menores o personas con capacidades diferentes
- Es un medio de prueba generalmente definitorio en los procesos penales por la importancia que tiene dentro del mismo el testimonio que se logra en ella.
- Es útil y necesaria, dada sus demostradas ventajas, su aplicación en nuestro procedimiento penal, en todos los procesos donde esté implicado un menor, ya sea como víctima o testigo.
- Su aplicación tendrá valor de prueba anticipada, y su utilización se regirá por los principios del debido proceso.

- No es tanta la inversión que se requiere para su implementación, tanto en materiales como en recursos humanos, comparada con su utilidad y los beneficios que reporta, tanto para el proceso, como para el bienestar del menor.

RECOMENDACIONES

1. Desarrollar en amplitud las políticas criminales de las instituciones del sector de justicia, para reivindicar el rol de la víctima dentro de los procesos y procedimientos penales, apoyando el desarrollo de técnicas o herramientas como la Cámara Gesell que tienden a evitar su revictimización.
2. Proponer, para su posible evaluación, la aplicación de la Cámara Gesell como medio de prueba híbrido en los procesos penales donde se encuentre involucrado un menor, prueba que tendría carácter de anticipada.
3. De realizarse, recomendamos su reglamentación, para darle seguridad y sea uniforme en todos los centros donde se realice.
4. Al Ministerio del Interior, a que creen un reglamento, aunque sea para uso interno, sobre la exploración de los menores, para así poderse valorarse ejecución y que la misma sea uniforme.
5. A la Fiscalía General de la República, a que establezca con carácter obligatorio la presencia de sus funcionarios en las exploraciones de los menores, como garantes de la legalidad y salvaguardas de los intereses superiores de los menores, no como parte del proceso sobre el cual versa la exploración.

BIBLIOGRAFÍA

Basilico, Ricardo Ángel, (2000) El Respeto a la Intimidad del Niño como Garantía.- Argentina: S.E.

Bonnier, M. Eduardo. Tratado Teórico-práctico de las pruebas en derecho civil y penal. Traducido al castellano y adicionado con arreglo al derecho español, por D. José Vicente y Caravantes. Tomo II. Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, á cargo de Julian Morales

Castillo Álvarez, Aurelio, (2002) Menores Víctimas en el Proceso Penal: Valoración y Credibilidad de su Testimonio.- Cienfuegos: S.E.

Colectivo de Autores. (2001). Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio. Editorial Pueblo y Educación

Colectivo de autores. Derecho Procesal Penal. Texto Básico de la Asignatura. La Habana, Cuba
Díaz Pinillos, Marcelino. Exposición magistral módulo el procedimiento penal, impartido del 12 al 16 de enero de 2009. Segunda cohorte de la Maestría en Criminología, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad San Carlos de Guatemala.

Marchiori, Hilda. Víctimas vulnerables: niños víctima de abuso sexual. En <http://www.ilanud.or.cr/A119.pdf>

Mendoza, Juan. Principios del proceso penal Bolivia. Material proporcionado para estudio del tema en el módulo de derecho procesal penal impartido del 24 al 28 de noviembre de 2008 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala.

Montero Aroca, Juan. Principios del proceso penal. Editorial Tirant Lo Blanch. Página virtual

Moscoso Maldonado, Claudia Marisol. Cámara Gesell en la declaración de víctimas de violencia sexual. Tesis en oposición al grado de Especialista en Derecho Penal. Guatemala, febrero 2010

Padula, Pablo Federico. La implementación de la cámara Gesell en la provincia de Misiones. XXV Congreso nacional de derecho procesal, realizado del 11 al 13 de noviembre de 2009 en la ciudad autónoma de Buenos Aires Argentina.

Palenzuela Páez, Luis, (2001) La Protección Legal a Infantes y Adolescentes por la Fiscalía, tomado de Revista Cubana de Derecho No. 18/2001.- Ciudad de la Habana: Editada por la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Rodríguez Sánchez, Rosario. La atención preventiva y postdelictiva a los menores victimizados sexualmente en la Provincia de La Habana en el 2007

Vitale, Gabriel M. A. De los testimonios de niños y niñas, análisis y propuestas. En revista penal online,

Legislación Nacional

A.N.P.P. (1998) Ley No. 62/1987. Código Penal.- La Habana: Editorial Ciencia Sociales.

A.N.P.P. (1988) Ley No. 16/1978. Código de la Niñez Y la Juventud.- La Habana: Editado por el Órgano de Divulgación del MINJUS

A.N.P.P. (1996) Ley de Procedimiento Penal.- La Habana: Editorial Ciencias Sociales

Instrucción 173/2003 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular

Legislación Extranjera

Código Procesal Penal de Argentina

Código Procesal Penal de Guatemala

Protocolo para utilizar en sala de entrevistas de Puerto Rico

Reglamento para el uso de la cámara de Gesell de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas Adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela

PRISIONEROS DEL IMPERIO

Injusticias cometidas contra Los Cinco Héroes

(Tomado de la Enciclopedia cubana EcuRed)



El caso de los Cinco Héroes antiterroristas cubanos, es típico de los juicios políticos que Estados Unidos critica como contrarios al respeto de los derechos humanos, cuando tienen lugar en otros países y es probable que sea citado como precedente para negarle un juicio justo a otros hombres y mujeres encausados en los Estados Unidos.

Después de un proceso ilegítimo, que no aceptó ninguna de las atenuantes de la Defensa y aplicó todas las agravantes de la Fiscalía, se dictó sentencias desmesuradas e injustas, aplicando las máximas condenas en cada caso, aun cuando los cargos principales no pudieron ser probados, vulnerando, entre otros, el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas que refrenda.

"(...) toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e **imparcial** (...)"

El gobierno de Estados Unidos, ha obstaculizado sistemáticamente las visitas de las madres, esposas e hijos de los prisioneros, lo que constituye una sanción adicional para ellos y sus seres queridos, además de constituir una violación de los derechos humanos.

De igual manera, las autoridades norteamericanas han dificultado las visitas de los abogados de la Defensa y las de funcionarios consulares cubanos radicados en Estados Unidos, lo que desconoce arbitrariamente el Artículo 37 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos.

Los Cinco, han sido sometidos a duros castigos para tratar de quebrar su integridad psíquica y física, confinamientos en solitario en celdas de castigo (huecos) por períodos de 17 meses y 48 días, sin haber cometido falta alguna a despecho del propio Reglamento del Buró de Prisioneros de Estados Unidos que precisa:

"(...) el tiempo máximo de confinamiento en celdas de castigo no debe exceder 60 días (...)"

y del Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos que señala:

"(...) Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...)"

En el caso, se ha violado la VIII Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y las normas de la ONU sobre el tratamiento de los presos y detenidos y las propias regulaciones carcelarias norteamericanas, al mantenerlos en confinamiento solitario por largos períodos, obstaculizando gravemente su defensa y ocasionándosele a ellos y a sus familiares sufrimientos injustificables que constituyen violaciones flagrantes de sus derechos humanos

Los cinco luchadores contra el terrorismo, han recibido tratamiento de delincuentes comunes y con ellos conviven en las penitenciarías, lo que viola el Artículo 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos:

"(...) Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos según su sexo y edad, sus antecedentes y motivos de detención (...)"

Nueva acción legal en el caso de los Cinco

Gerardo Hernández Nordelo, sentenciado a dos cadenas perpetuas por conspiración para cometer asesinato en primer grado y conspiración para cometer espionaje, respectivamente.

Además, 15 años por los cargos de conspiración para cometer delito contra Estados Unidos, documentación falsa y agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.

El delito de conspiración para cometer asesinato por el que resultó sancionado, no solo no fue probado, sino que el cargo no tiene precedente en el derecho norteamericano, ya que el derribo de las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, fue un acto de un Estado protegiendo su soberanía, su tierra y su pueblo.

El 6 de junio de 2012, los abogados Tom Goldstein y Martin Garbus, abogados defensores de Gerardo Hernández Nordelo presentaron, a través de su abogado local Richard Klugh, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida una moción solicitando una audiencia oral, así como que la Corte ordene al Gobierno entregar documentos y otros materiales que obran en su poder y que no han sido dados a conocer durante el proceso legal (procedimiento conocido como *Discovery*).

Esta moción es parte del proceso de apelación colateral iniciado el 14 de junio de 2010 y está basada en el derecho que tiene el Peticionante y sus co-acusados de conocer el alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el Gobierno con la intención de asegurar que fueran declarados culpables.

Su propósito es obtener, mediante interrogatorios, presentación de documentos, deposiciones y citaciones judiciales, toda la evidencia necesaria para que sea examinada por el tribunal en una audiencia la cual evidenciaría y probaría que las condenas deben ser anuladas.

EVENTOS



*Instituto de Desarrollo
e Investigaciones del Derecho*



Fiscalía General de la República

XI ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2012

Del 2 al 4 de octubre del 2012

PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA

Estimados colegas:

*La Fiscalía General de la República de Cuba y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID), se complacen en informarle que del **2 al 4 de octubre del año 2012** se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el **XI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2012***

Este evento, ya tradicional en el ámbito internacional por su alcance y contenido, cumple dos décadas de vigencia con su oncenava edición, que reunirá a profesionales y técnicos interesados en la materia para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las distintas disciplinas que lo integran.

Los eventos Ciencias Penales, se han celebrado cada dos años de forma ininterrumpida a partir de 1992, con creciente participación de destacados especialistas de las más diversas latitudes, lo que unido a la actualidad de sus temáticas, han convertido a este foro, en uno de los cónclaves científicos de mayor prestigio internacional en Iberoamérica.

En virtud de lo expuesto, mucho nos place extenderle muy cordialmente una cálida invitación para compartir las sesiones de este importante evento, donde será organizado un atractivo programa social, de modo que los delegados y sus acompañantes disfruten de la tradicional hospitalidad del pueblo cubano.

Quedamos en espera de conocer muy pronto acerca de su inscripción en el Encuentro, al igual que tener el privilegio de darle la bienvenida en La Habana. Mientras tanto, sírvase aceptar los más cordiales saludos que le hacemos llegar desde Cuba.

Fraternalmente,

Darío Delgado Cura

Presidente

Comité Organizador

ORGANIZADO POR:

- Fiscalía General de la República de Cuba.
- Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID).
- Palacio de Convenciones de la Habana

COAUSPICIAN:

- Tribunal Supremo Popular
- Ministerio de Justicia
- Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC)
- Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC)
- Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana
- Instituto de Medicina Legal

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

El evento va dirigido fundamentalmente a Abogados, Jueces, Fiscales, Asesores Jurídicos, Jueces de Instrucción, Policías, Penitenciarios, Criminalistas, Criminólogos, Victimólogos, Médicos Legales, Psiquiatras Forenses, Psicólogos, Sociólogos, Contralores, Auditores, Economistas, Politólogos, Profesores y Estudiantes Universitarios, así como otros especialistas interesados en la materia.

IDIOMAS OFICIALES: español-inglés

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA CIENTÍFICO:

- Conferencias: 30 minutos cada una
- Talleres 120 minutos
- Mesas Redondas: 90 minutos
- Paneles 90 minutos
- Presentación de trabajos 15 minutos

TEMÁTICAS PRINCIPALES:

La prevención y el enfrentamiento de:

- Tráfico ilegal de Drogas y de migrantes
- Trata de Personas
- El Terrorismo
- Delitos Económicos
- Corrupción

Los trabajos deberán ser presentados a la Comisión Técnica antes del 30 de Agosto del año 2012 para que puedan ser incluidos en el Programa Científico del Encuentro.

La Comisión Técnica informará la aceptación o no de los trabajos y su forma de presentación, sin que ello excluya la posibilidad de su participación en el evento como delegado. Se aceptarán hasta dos autores por trabajo que quedarían incluidos, siempre que el trabajo sea aceptado, en el programa científico.

La decisión del Comité Científico es inapelable.

FORMATO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS:

Los trabajos deben ser enviados en versión electrónica, a las siguientes direcciones: relaciones@fgr.cu / ifgr1@enet.cu , para asegurar su reproducción en las Memorias del Evento.

Los trabajos completos tendrán como mínimo 5 cuartillas y un máximo de 15, estructurado en introducción, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.

En la presentación debe aparecer título, autores, institución, ciudad, y país. Acompañado además por un **RESUMEN** con no más de 250 palabras.

El procesador de texto utilizado debe ser Word versión 6.0 o superior con el siguiente formato:

Letra fuente: Arial 12 puntos

Texto: Justificado

Márgenes: 2,5 cm y hoja de 8.5 x 11

Título del trabajo: Arial a 14 puntos, centrado y negrita

Datos del autor: Nombre y apellidos del autor (es) en negrita y cursiva

Nombre y dirección de la institución, teléfono, fax e e-mail, país: en negrita.

Las imágenes, tablas, gráficos, etc., deben estar incorporados en el documento de Word. El documento no debe exceder de 1megabyte de tamaño. En caso de que sea mayor de 300 kbytes, debe ser compactado.

MEDIOS TÉCNICOS A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

- Proyector de datos
- Computadora

Las presentaciones con computadoras deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

1. Sistemas operativos sobre Windows
2. Presentaciones en CD, DVD, Memoria USB y otros medios de almacenamiento masivo.

Los medios audiovisuales que se requieren para las presentaciones, deberán ser informados con antelación al Comité Organizador.

Los CDs, DVDs y unidades de almacenamiento masivo, que acompañen los trabajos serán entregadas por los propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales, que se habilitará en el Palacio de Convenciones, con 24 horas de antelación a su presentación en la sala.

Las presentaciones digitales deben ajustarse a los siguientes requisitos:

- Sistemas operativos sobre Windows
- Presentaciones en Power Point
- Presentaciones en CD, DVD, unidades de almacenamiento masivo
- Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones:

WinZip versión 8,0 (o inferior)

Winrar versión 2,5 (o inferior)

Arj

Presentación de imágenes de diseño en Corel 9 ó 10. Las aplicaciones que necesiten programas asociados deben venir con las instalaciones de los mismos (Quicktime, Adobe Acrobat, etcétera).

INVITACIONES:

Los participantes que requieran Carta de Invitación a participar, con el fin de realizar los trámites de viaje correspondiente, podrán solicitarla al Coordinador del Comité Organizador.

El Programa Científico del Congreso se desarrollará en sesiones plenarias, talleres, paneles y mesas redondas.

Se impartirán conferencias magistrales por destacados científicos sobre aspectos de mayor interés y actualidad.

A partir del 15 de septiembre, recibirán todos los interesados un programa científico preliminar con los principales Conferencistas confirmados.

INSCRIPCION AL ENCUENTRO:

Delegado	230.00 CUC
Ponente	200.00 CUC
Estudiante de Pre -Grado	160.00 CUC
Acompañante	60.00 CUC

NOTA: El Estudiantes de Pre-Grado, deberá presentar en el momento de acreditarse su carnet de Estudiante, así como la carta de la Universidad debidamente firmada y acuada.

ALOJAMIENTO:

Para mayor información sobre su alojamiento puede contactar con Migdalia Luna Cisneros, Organizadora Profesional del Encuentro, quien le informará todo lo relacionado con los Hoteles destinados al Encuentro así como sus precios.

Puede contactar con:

Lic. Migdalia Luna Cisneros

Especialista en Eventos

Palacio de Convenciones

Teléfono: 537 208 6176

E-mail: migdalia@palco.cu

INFORMACIÓN GENERAL:

La cuota de inscripción al igual otros pagos en Cuba, se abonarán en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), moneda de circulación oficial en el país. La misma se puede obtener a su arribo, en el Aeropuerto, Hotel. Oficinas Bancarias y Casas de Cambio.

Para más información sobre la conversión de la moneda CUC, visite el Sitio Web del Banco Metropolitano: www.banco-metropolitano.com

CONSULTAS:

Para mayor información sobre el XI Encuentro de Ciencias Penales 2012 puede comunicarse con los organizadores del Encuentro:

Msc Patrica Rizo Cabrera

Coordinadora Comité Organizador

Fiscalía General de la República de Cuba

1ra y 18, Miramar, Playa

La Habana, Cuba, CP 11 300

Teléfono: (537)2069068 / (537)2069066 Fax: (537)206-9067

E-mail: relaciones@fgr.cu / ifgr1@enet.cu

Lic. Migdalia Luna Cisneros

Organizadora Profesional de Congresos

Palacio de Convenciones de la Habana

Teléfono: 537- 208 6176

Fax: 537 – 202 2322

E-mail: mgdalia@palco.cu

GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

▪ **Criminología**

La **criminología** es una ciencia de carácter multidisciplinar que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y la antropología social, tomando para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal. La criminología estudia las causas del crimen y preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. Las áreas de investigación criminológicas incluyen la incidencia y las formas de crimen así como sus causas y consecuencias. También reúnen las reacciones sociales y las regulaciones gubernamentales respecto al crimen. El nombre de esta ciencia fue utilizado por primera vez por el antropólogo francés Paul Topinard. En 1885, el profesor italiano de derecho Rafael Garófalo acuñó este término.

Tomado de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa>

▪ **Delitos Informáticos**

Son aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionados por el Derecho Penal que hacen uso indebido de cualquier medio informático. El delito informático implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etc. Sin embargo debe destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha propiciado la necesidad de regulación por parte del Derecho.

Tomado de: http://es.scribd.com/teito_0303_/d/40349675-DELITOS-INFORMATICOS

▪ **Persona jurídica**

Una **persona jurídica** o **persona moral** es un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel.

En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona física. Así, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.

Tomado: http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica

▪ **Tortura**

Del latín *tortūra*, la **tortura** es el **tormento infligido a alguien a través de diversos métodos e instrumentos**. Su finalidad suele ser obtener una confesión o funcionar como castigo al torturado, aunque también puede ejecutarse como placer sádico por parte del torturador.

La tortura **consiste en causar de forma intencional un grave dolor físico o psicológico a alguien**.

Con este dolor, se intenta quebrar la **resistencia** y la **moral** del torturado, despojándolo de su integridad.

La rotura de huesos, las mutilaciones, los cortes, las quemaduras, las descargas eléctricas y el ahogamiento son algunas de las torturas físicas más habituales. En cuanto a la tortura psicológica, puede incluir la humillación verbal, la manipulación o falsedad de información sobre sus seres queridos, la privación sensorial y cualquier otro mecanismo que intente destruir la resistencia moral.

La noción de tortura fue cambiando con la época: de este modo, castigos que hoy son considerados como tortuosos, antes eran aceptados o tolerados. Recién en **1984** se estableció un tratado internacional que persigue a la tortura como un **delito**, denominado **Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes**.

Algunos gobiernos, sin embargo, encuentran la forma de evadir las normativas internacionales que prohíben la tortura. Un procedimiento habitual es considerar a un sospechoso o delincuente común como un sujeto de alta peligrosidad que requiere de las fuerzas armadas para su detención y custodia. Los militares proceden a interrogarlo de acuerdo a sus métodos y, si allí tiene lugar la tortura, queda fuera de la acción penal ya que la Justicia ordinaria no tiene jurisdicción sobre el accionar militar.

Tomado de: <http://definicion.de/tortura/>